

## DOCUMENTACION

**Discurso de Paulo VI del 14-I-1978 al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede sobre el respeto a los derechos humanos [«Ecclesia» del 28 de enero de 1978].**

Excelencias y queridos señores: Con alegría aceptamos estos cálidos votos. Nos sentimos profundamente emocionados por las palabras llenas de benevolencia y de confianza que vuestro decano acaba de dirigirnos en nombre de todos vosotros, evocando iniciativas o acontecimientos personales y eclesiales que nos son queridos. Os agradecemos igualmente vuestra presencia. Tened a bien aceptar los deseos muy cordiales que, por nuestra parte, tenemos la satisfacción de ofrecerlos; por encima de vuestras personas, se dirigen a vuestras familias, a vuestras embajadas, a los Estados que representáis ante la Santa Sede. Que Dios los conserve en paz a lo largo de todo el año nuevo.

Este encuentro tradicional del mes de enero para el intercambio de votos nos permite dialogar con vosotros cada año. Desearíamos elegir hoy, como objeto de reflexión, el tema tan importante y tan actual de los derechos humanos.

Se habla y se discute mucho hoy día acerca de los derechos del hombre. Se hace con pasión, a veces con cólera, teniendo casi siempre a la vista una justicia mayor, efectiva o imaginada. Todas estas reivindicaciones no parecen razonables o realizables, porque a veces están inspiradas por arrebatos individualistas o utopías anárquicas: algunos son incluso moralmente inadmisibles. Pero, en conjunto, en tanto que aspiración y tensión hacia una más alta esperanza, ese interés incrementado por un espacio de libertad y de responsabilidad más favorable a la persona es un hecho positivo que es necesario estimular; la Iglesia lo sigue y quiere conti-

nuar siguiéndolo con simpatía, prestándole plenamente, de acuerdo con su misión propia, la luz y las aclaraciones necesarias.

Entre el conjunto muy amplio y complejo de los temas que conciernen a los derechos de la persona humana nos ha parecido útil evocar, de una forma particular, la libertad religiosa. La igualdad racial y el derecho del hombre a la integridad física y psíquica. Esta elección nos la ha sugerido el hecho de que estos tres valores se sitúan en la esfera de las relaciones entre las personas y los poderes públicos, y Nos os tenemos hoy justamente como oyentes, a vosotros que representáis los Gobiernos de tantos países.

### 1. *La libertad religiosa.*

Una de las características de nuestra sociedad secularizada es, sin duda alguna, la tendencia a relegar la fe religiosa al rango de opción privada. Y, sin embargo, nunca como en nuestra época, donde quiera que es oprimida o limitada, la libertad de religión y de conciencia ha sido invocada y reivindicada con tanta insistencia, más aún con pasión, como un valor de la existencia, que reclama una dimensión exterior y comunitaria. Basta ver los llamamientos que nos llegan continuamente de personas y de grupos, incluso no católicos, de hombres y de mujeres de toda convicción, e igualmente el amplio aplauso que encuentran las iniciativas de la Santa Sede cuando pide ante las instancias internacionales el respeto hacia la libertad religiosa de todos.

Algunas ideologías difusas quiere catalogar también la fe en Dios entre los signos de la debilidad y de la alienación humana. Y, sin embargo, jamás como en estos últimos decenios, los creyentes se han mostrado más hombres libres, independientes en su juicio moral, resistentes en medio de las privaciones, intrépidos bajo las presiones y las opresiones, y ante la muerte. Tenemos como prueba de eso los testimonios de los que han compartido con ellos la prisión o el internamiento, y también los sacrificios que saben soportar serenamente, en el plano de la vida civil, del trabajo, de los estudios, de la carrera, una multitud de creyentes que aceptan sufrir discriminaciones sobre ellos o sobre sus hijos con tal de que esto no afecte a sus propias convicciones.

Se debe reconocer que todas o casi todas las constituciones del mundo, sin hablar de muchos documentos internacionales de alcance solemne, contienen garantías —con frecuencia amplias y detalladas— en favor de la libertad de religión y de conciencia, y de la igualdad de los ciudadanos, sin distinción de fe religiosa. Pero no se puede impedir el comprobar las limitaciones y las prohibiciones a las que se encuentran sometidas en diversos países, en el plano legislativo y administrativo, o simplemente en los hechos, numerosas manifestaciones de la vida religiosa: la profesión de fe individual, la educación de los jóvenes, la acción pastoral de sacerdotes o de obispos, la autonomía interna de comunidades religiosas, la facultad de evangelizar, la utilización de la prensa, el acceso a los medios de comunicación social, etc. Por tanto, es necesario concluir que los creyentes siguen siendo considerados como ciudadanos sospechosos, a los que se debe vigilar muy particularmente.

Desearíamos que nuestro discurso en este momento fuese franco, respetuoso con la verdad y, al mismo tiempo, amistoso y constructivo. Es cierto que la persona que cree sinceramente en Dios y se esfuerza, a pesar de su debilidad y de sus pecados, por vivir en comunión de amor con El se siente fuerte y libre. La fuerza no es la suya: es la fuerza del Otro, al que se confía; la libertad le viene del hecho de que no teme los poderes «que matan el cuerpo» (Luc. 12,4). «Es una paradoja curiosa —decía maliciosamente sir Thomas More, humanista y hombre

del Estado, a su hija Margarita antes de morir— que un hombre pueda perder la cabeza sin padecer daño en ella».

Menos proclive a la sugestión, el creyente está abierto a la verdad y a la justicia, tiene el corazón disponible para sus hermanos y siente el deber imperativo de ser fiel a las responsabilidades asumidas. Se le puede pedir todo para los demás hombres y para la sociedad, salvo lo que su conciencia le prohíbe.

Ojalá que los cristianos sepan beber en la fe una fuerza moral particular que los comprometa, al menos tanto e incluso más que a los demás, en favor de una sociedad más humana y más justa: esto es lo que comienzan a reconocer incluso aquellos que, en otros tiempos, tenían la costumbre de calificar la fe religiosa como una especie de huida de lo real. Entonces parece permitido preguntarse: ¿puede un Estado solicitar con éxito una confianza y una colaboración total mientras que, por una especie de «confesionalismo negativo», se proclama ateo y, declarando abiertamente respetar en un cierto marco las creencias individuales, toma posición contra la fe de una parte de esos ciudadanos? ¿Cómo pensar que un padre o una madre tienen la esperanza de una sociedad que se quería nueva y más justa, cuando una educación ideológica totalitaria es promovida en las escuelas, y cuando resulta difícil para las familias, incluso en la intimidad del hogar, comunicar a sus hijos los valores del espíritu que son el fundamento de la vida? ¿Cómo pueden sentirse tranquilos la Iglesia y los pastores que alientan, sin embargo, con relación a la autoridad civil, un respeto sincero y fundado, según las frases de San Pablo, «no por miedo del castigo, sino por razón de conciencia» (Rom. 13,5), cuando sigue existiendo oposición a la apertura de lugares de culto o al envío de sacerdotes allí donde su presencia es reclamada por los fieles, o cuando se limita el acceso al sacerdocio o a la consagración religiosa?

Por nuestra parte, siempre hemos alentado a pastores y fieles a dar pruebas de una paciencia perseverante, a ser leales con los poderes públicos, a comprometerse generosamente en el campo cívico y social para todo lo que contribuye al bien de su país. Nos, hemos dado públicamente la prueba de ello, incluso en fecha reciente, con motivo de las visitas deferentes y corteses de altas autoridades

civiles. Desde hace mucho tiempo, con la excepción de algunos países en los cuales esto no nos ha sido permitido hasta ahora, hemos iniciado un diálogo franco y abierto, al que no se puede considerar como estéril, y que deseáramos más profundo, ampliando también a puntos difíciles todavía no abordados.

Deseáramos ahora, dando entrada a una perspectiva más amplia y hablando no solamente para los católicos, sino en favor de todos los creyentes, formular un interrogante, en los siguientes términos: ¿No están ya maduros los tiempos, no se encuentra suficientemente avanzada la evolución histórica para que ciertas tensiones del pasado sean superadas, para que sea aceptada la súplica de millones de personas, y para que todos —en condiciones parecidas entre conciudadanos y con el concurso solidario de todos al bien cívico y social de su país— puedan beneficiarse del justo espacio de libertad para su fe, en sus expresiones personales y comunitarias? ¿No existen en medio de las vicisitudes de los pueblos, incluso después de los trastornos más radicales, una madurez natural de los acontecimientos, una tregua de los espíritus, una marcha de las generaciones en busca de una nueva etapa más humana, en las que se consume y se disuelve lo que opone y divide, en las que renace igualmente y se afirma lo que acoge, y es causa de fraternización y reunión? Nos parece que justicia, sabiduría y realismo convergen para cimentar la esperanza fundada y el deseo cordial de que semejante momento, capaz de procurar la felicidad a tantos corazones, no se demore para más tarde ni se eluda.

## 2. *La igualdad entre los hombres.*

A la igualdad sin distinción de origen o de raza están consagrados documentos internacionales solemnes, como la Convención de las Naciones Unidas del 21 de diciembre de 1965 contra toda forma de discriminación racial, a la cual la Santa Sede ha prestado también su adhesión. Más que sobre su aspecto jurídico y político, Nos deseáramos llamar la atención aquí sobre el sentido religioso y moral de la dignidad igual de todos los hombres.

Para quien cree en Dios, todos los seres humanos, incluso los menos favoreci-

dos, son hijos del Padre universal que los ha creado a su imagen y guía sus destinos con un amor delicado. Paternidad de Dios significa hermandad entre los hombres: es un punto firme del universalismo cristiano, un punto común también con otras grandes religiones y un axioma de la más alta sabiduría humana de todos los tiempos, la que tiene el culto de la dignidad del hombre.

Para un cristiano, ningún hombre está excluido de la posibilidad de ser salvado por Cristo y de gozar de un mismo destino en el Reino de Dios. Resulta, pues, inconcebible para quien acepta el mensaje evangélico, incluso teniendo en cuenta las diversidades físicas, intelectuales o morales, negar la igualdad humana fundamental en nombre de la pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico. Nos acordamos todavía con emoción de las valientes expresiones utilizadas por nuestro gran predecesor Pío XI, de venerable memoria, en la carta encíclica que publicó hace cuarenta años, para condenar a los que querían atentar contra la universalidad de la redención cristiana por medio de la así llamada «revelación» de un «mito de la sangre y de la raza».

La Iglesia católica, es decir, universal por su misión y su difusión, de la misma manera que sufre por cada recrudescimiento de los nacionalismos antagonísticos, está también preocupada por la agravación de rivalidades raciales y tribales que fomentan divisiones y rencores entre los hombres y los pueblos, y pueden llegar hasta afectar incluso a hermanos en la fe.

Nos proponemos ahora llamar más especialmente la atención sobre el conflicto racial más general que, en la historia africana de los últimos decenios, ha revestido un carácter paradigmático, porque está vinculado a la descolonización y al acceso de los pueblos de África a la independencia: se trata de la tentativa de crear instancias jurídicas y políticas violando los principios del sufragio universal y de la autodeterminación de los pueblos, que precisamente la cultura europea y occidental ha contribuido a consolidar y a difundir en el mundo.

La Iglesia comprende las justas razones por las que los pueblos africanos rechazan tales situaciones. Sin duda alguna, ella no puede alentar ni justificar la violencia que derrama la sangre, siembra la destrucción, consigue que el odio alcance proporciones desmesuradas y desencadena

las represalias y las venganzas. Pero la Iglesia no puede silenciar su doctrina, a saber, que toda teoría racista es contraria a la fe y al amor cristianos: precisamente, el horror que los cristianos tienen de la violencia, debe impulsarlos a reafirmar la dignidad igual de todos los hombres con mayor claridad y coraje. Recordando las aprobaciones que suscita, desde hace algunos años, nuestra fórmula lanzada con motivo de la Jornada de la Paz: «Todo hombre es mi hermano», Nos deseáramos que se exprese cada vez con más fuerza y con mayor convicción, de manera legítima pero eficaz, la solidaridad efectiva de todos en favor de una solución de justicia, particularmente en el África Austral, solución vanamente intentada hasta el momento por iniciativas y propuestas diversas.

### 3. *Integridad física y psíquica de las personas.*

Para quien cree en Dios, la vida humana es un don que viene de El, un depósito sagrado que es necesario conservar en su integridad. La Iglesia se siente comprometida a enseñar el respeto a la misma en toda circunstancia y en toda etapa de la existencia, desde el instante de la concepción, cuando la vida comienza a formarse en el seno materno, hasta la cita con nuestra «hermana la Muerte».

Desde la cuna a la tumba, todo ser humano, incluso el más débil y el menos favorecido, disminuido o abandonado, posee un elemento de nobleza que es la imagen de Dios y la semejanza con El. Y Jesús ha enseñado a sus discípulos que en la persona de los pobres y de los pequeños está representada, con una evidencia particular, su propia Persona.

La Iglesia y los creyentes no pueden, pues permanecer insensibles e inertes frente a la multiplicación de denuncias de torturas y de malos tratos practicados en diversos países sobre personas detenidas, interrogadas o puestas en estado de vigilancia o de detención. Mientras que constituciones y legislaciones dejan lugar al principio del derecho a la defensa en todas las etapas de la justicia, mientras

que se avanzan propuestas para humanizar los lugares de detención, se comprueba, sin embargo, que las técnicas de tortura se perfeccionan para debilitar la resistencia de los detenidos, y que a veces no se duda en infligirles lesiones incurables y humillantes para el cuerpo y para el espíritu.

¿Cómo no sentirse consternado cuando se sabe que numerosas familias angustiadas dirigen en vano súplicas en favor de sus seres queridos, y cuando incluso las peticiones de información se acumulan sin recibir respuesta? Igualmente, no se puede hacer silencio sobre la práctica, denunciada por tantos lados, que consiste en asemejar los culpables —o los que se consideran como tales— de oposición política, a las personas que necesitan cuidados psiquiátricos, añadiendo de este modo a su pena otro motivo, acaso más duro, de amargura.

¿Por qué la Iglesia, de la misma manera que lo ha hecho respecto al duelo y lo sigue haciendo respecto al aborto, no toma una posición severa frente a la tortura y a las violencias análogas infligidas a la persona humana? Los que las ordenan o las practican cometen un crimen, verdaderamente muy grave para la conciencia cristiana, que no puede dejar de reaccionar y de trabajar, en la medida de lo posible, para hacer que se adopten remedios adecuados y eficaces.

Estas son, en suma, excelencias y queridos señores, las reflexiones que Nos deseábamos expresar, seguros de encontraros sensibles y acogedores. Nos las confiamos, con nuestros deseos de prosperidad y de paz para las autoridades y los países que representáis, a Aquel que preside el destino de los hombres y de los pueblos, y abre los corazones a la verdad, a la justicia y al amor. Ojalá que el año que acaba de comenzar sea enriquecido con un nuevo don de Dios, el de un progreso considerable en favor de los derechos del hombre.

Nos añadimos este voto a todos los que formulamos para vosotros mismos y para vuestros seres queridos, al tiempo que pedimos al Señor os colme de sus bendiciones.



Carta del 25 de enero de 1978 del Secretario de Estado, Card. Villot, al Congreso Mundial de la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas, celebrado en Bombay [*L'Osservatore Romano*, ed. española, del 12 de febrero de 1978].

[...] A pesar de la sensibilidad de la civilización moderna en cuestiones de derechos humanos —de los que el derecho a la vida es uno de los más sagrados—, nuestra época paradójicamente se está acostumbrando demasiado a los ataques contra la vida y contra la dignidad de la vida.

El hombre moderno ha alcanzado niveles de progreso que hace un siglo no eran ni siquiera imaginables, pero al mismo tiempo le asalta la duda acerca del valor de su progreso material. ¿De verdad —se pregunta— estos avances ayudan a vivir profunda y auténticamente la vida del ser humano, ayudan a ser más humano; o más bien, sofocan las posibilidades genuinamente humanas de la vida? ¿Y cómo se puede entender que dicho progreso sea privilegio de los que en último análisis son porción muy limitada de la humanidad, mientras vastos sectores de la misma viven una existencia infrahumana?

Además, la ciencia ha proporcionado medios de prolongar la vida en circunstancias que solían considerarse mortales y de modificar la calidad mental y física de la vida. Ello plantea la cuestión del límite hasta el que es obligatorio o conveniente intervenir, y qué medios elegir de entre los disponibles actualmente, con objeto de proteger la dignidad de la persona humana y su equilibrio sicosomático.

Estas cuestiones son de interés para todos, individuos y familias, y también profesionales de los campos de la economía, sociología, ecología, ciencia, tecnología, información, educación y política nacional e internacional. Tampoco pueden ser ignoradas estas cuestiones por quienes están implicados en la legislación y planificación de los Gobiernos.

Entre los grupos a quienes concierne, los médicos tienen gran importancia. Estos «protectores, defensores y amigos de la humanidad», como los ha calificado recientemente el Santo Padre en su Mensaje para la XI Jornada mundial de la Paz, se hallan en situación de poder apreciar el progreso científico de las distintas ramas de la medicina como instrumento a utili-

zar al servicio de la calidad de la vida. Bajo esta luz, ningún médico consciente de su misión puede oponerse a tener en cuenta los adelantos de la ciencia médica.

Sin embargo, las cuestiones arriba citadas pertenecen en primer lugar al orden moral y religioso. El no reconocer que la noción tiene su meollo verdadero en la dimensión ética e incluso más aún en la dimensión teológica, llevaría a una noción seriamente equivocada de la calidad de la vida, y a prácticas erradas o viciadas.

No hay duda de que la omisión de estas dimensiones esenciales y la consiguiente concepción falsa de la vida son las que conducen a invocar con demasiada frecuencia la «calidad de la vida», para justificar principios ideológicos, normas, programas y, luego, medidas concretas que atentan contra la dignidad de la vida en sí misma. Entre éstas se pueden citar, por ejemplo, el aborto provocado, el infanticidio, la eutanasia, la tortura y otras prácticas similares.

Por otra parte, la fe del médico católico —que está enraizada en la Palabra de Dios, contenida en la Escritura, sostenida por las enseñanzas de la Iglesia y vivida en la comunión eclesial— le inspirará siempre el concepto exacto y la práctica ennoblecadora de la verdadera «calidad de la vida» [...].

Las primerísimas páginas de la Escritura presentan la vida como venida de Dios que creó al hombre a imagen suya y desea que todos los hombres participen de su vida divina (cf. *Gén* 1 y 2) [...].

Esta sencilla verdad básica acerca del significado y objeto de la vida, sobre los cuales se nos invita a reflexionar continuamente, libra de toda clase de pesimismo respecto de la vida. Nos enseña que incluso el sufrimiento tiene significado y que la muerte no es el final o la destrucción del ser, sino por el contrario, es participación en el misterio de Aquel que se llamó a Sí mismo «la vida» (*Jn* 11, 25). Nos hace ver que lo espiritual tiene prioridad sobre lo material y que la prosperidad, la abundancia y el placer no son bienes absolutos. Asimismo prohíbe destruir

la vida y manipular a los demás según nuestra voluntad.

Sin embargo, mientras es Dios quien da la vida, ha encomendado al hombre, a la familia y a la sociedad la función de desarrollar las cualidades intrínsecas de cada individuo, sean intelectuales, morales o físicas. Dentro de esta función general se inserta la misión del médico: misión de prevenir o corregir con su consejo y su arte desviaciones que afligen a la persona humana; misión de ayudar a la persona humana a afrontar la prueba del sufrimiento y de la muerte misma, pero sin llegar al uso excesivo y perjudicial de medicamentos que influyen en la mente; misión de contribuir a educar al público para que evite el consumo irracional de medicinas.

La tarea confiada al ser humano es la de someter y dominar el mundo (cf. *Gén* 1, 28). Nadie debiera imitar al hombre rico de la parábola del Evangelio, que no se ocupó del pobre llamado Lázaro (cf. *Lc* 16, 19-31). Antes bien, todos estamos llamados a comprometernos por conseguir para cada hombre los medios para poder vivir una verdadera vida humana. La mejor condición de vida que el progreso ha hecho posible, impulsará hoy al cumplimiento de los deberes y a alcanzar la perfección que Dios ha fijado para cada uno de nosotros.

En cuanto médicos católicos sois bien conscientes de la grave responsabilidad

que habéis asumido, sobre todo respecto de la salud física y mental de quienes se han confiado a vuestros cuidados. El Santo Padre desea que os diga de nuevo las palabras de estima contenidas en su Mensaje para la XI Jornada mundial de la Paz. Pero vosotros sabéis también que la enfermedad e incluso la deformación orgánica del individuo no le despoja de su dignidad humana y de su derecho inalienable a la vida y que, por tanto, no se puede suprimir una vida humana en nombre de la «calidad de la vida».

Además, el médico está llamado a atender al enfermo no sólo con competencia científica, sino también con amor y respeto. No será rara la ocasión en que acuda al mismo enfermo para que le ayude a decidir en casos bien serios a veces. Dichas decisiones no deben fundarse en el terreno emocional, sino en criterios objetivos; deben tener presentes las enseñanzas de la Iglesia que el doctor debe estudiar con atención. A este respecto puede ser útil recordar las enseñanzas de la doctrina católica referentes al deber del doctor de emplear, en su situación concreta, todos los medios a disposición para salvar la vida humana. Aunque el enfermo puede rehusar los medios terapéuticos clasificados como «extraordinarios», sobre todo cuando no hay esperanza de mejorar sus condiciones, no puede rechazar los medios ordinarios y los servicios elementales que la sociedad y la ciencia médica deben poner a disposición de todos [...].

**Carta del 26 de enero de 1978 del Secretario de Estado, Cardenal Villot, al Presidente de la XXXI Semana Social de España sobre la libertad de enseñanza [«Ecclesia», del 4 de febrero de 1978].**

Señor presidente:

Al celebrarse la XXXI Semana Social de España en torno al tema «Educación y democracia», el Santo Padre, que sigue con vivo interés los esfuerzos y realizaciones del pueblo español en esta importante y delicada fase de su historia, me encarga transmitir su cordial palabra de saludo y

de orientación a todos los participantes en la Semana.

Su Santidad se complace profundamente de que el tema propuesto a la reflexión de los católicos españoles en dichas jornadas sea el de la educación, un tema que siempre ha tenido y tendrá capital importancia en el terreno social y que reviste a

la vez, en el caso concreto español, una gran actualidad.

Completando y profundizando los estudios realizados en precedentes semanas, la actual detiene su atención sobre un aspecto central del desarrollo de la persona humana, la cual no puede llegar a un nivel verdaderamente humano ni puede insertarse de manera consciente y digna en la sociedad sin adquirir un conveniente bagaje cultural.

En esta perspectiva, la reflexión vuestra se coloca en el amplio contexto de los derechos humanos, en sintonía con declaraciones programáticas de ámbito mundial (cf. Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 10 diciembre 1948; Declaración de los Derechos del Niño, 20 noviembre 1959), a las que el Concilio Vaticano II ha hecho alusión (cf. *Gravissimum educationis*, introd.).

Por ello la Iglesia, que considera el acceso a la cultura como un derecho natural del hombre, recuerda a los cristianos como «uno de los deberes más propios de nuestra época» el de trabajar con ahínco «para que se reconozca en todas partes y se haga efectivo el derecho de todos a la cultura, exigido por la dignidad de la persona, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social» (*Gaudium et spes*, 6).

Ha de considerarse, por tanto, un objetivo primario e integrador de los restantes en campo educativo, hacer posible a todos los miembros de la sociedad el acceso a la cultura y a la formación integral. Por la importancia que reviste en la vida del hombre y por el influjo que ello ejerce en el progreso social contemporáneo (cf. *Gravissimum educationis*, introducción).

Desgraciadamente, son muchos los millones de niños, jóvenes y adultos que todavía no disponen hoy de puestos de enseñanza para poder acceder a la cultura. De ahí que se imponga un compromiso solidario, a escala nacional e internacional, de todas las fuerzas disponibles: estatales, sociales, de instituciones religiosas, para remediar de manera adecuada a tales carencias. Ante un cometido de tal magnitud, en el que todos pueden encontrar su justo puesto, resultaría un contrasentido cualquier exclusión por vía jurídica, económica o ideológica de alguno de los participantes en ese quehacer.

Ahora bien, como la educación entendida en sentido integral, que no se agota en la sola enseñanza, es el cauce ordina-

rio de acceso a la cultura, el derecho de la persona a recibir esa educación resultaría meramente teórica sin el derecho de otros a impartírsela. Y aquí hay que dejar en claro que tal derecho, que es a la vez deber, corresponde en primer lugar, por motivos de orden natural, a la familia, para extenderse luego a la sociedad, al Estado, a la Iglesia.

En un análisis de las condiciones en las que ha de desarrollarse el acceso a la cultura, no se puede prescindir de hacer referencia a la libertad. La doctrina social de la Iglesia se mueve en este punto entre dos principios: el primero es que la persona humana no puede llegar a un nivel plenamente humano si no es mediante la cultura (cf. *Gaudium et spes*, 53); el segundo proclama que ésta tiene siempre necesidad de una justa libertad y autonomía (*ibid.*, 59). Con razón afirmaba ya Pío XII: «Toda educación sana tiende a hacer al educador más innecesario poco a poco y al educando independiente, dentro de los justos límites» (AAS, 44, 1952, página 418).

Para construir sobre bases seguras una sociedad democrática hay que poner como elemento irrenunciable la educación en la libertad, con atención indisoluble a todas sus prerrogativas y a las responsabilidades derivantes. A algunos les desagrada que la Iglesia hable de «límites a la libertad» o que la califique de «justa» o «legítima». Sin embargo, habrá que reconocer que se trata de un servicio a la misma, evitando su destrucción por el caos, por excesos insolidarios o por indebidas opresiones a la libertad ajena (cf. *Octogesima adveniens*, 25).

En el campo educativo es justo seguir la orientación socrática de extraer de la naturaleza humana y de la persona del alumno todas sus virtualidades, pero concertándola con la apertura a los demás y con la referencia a los valores trascendentes del hombre (cf. *Divini Illius Magistri*, 45).

La educación de la libertad está íntimamente relacionada con la libertad de la educación. Todos los hombres tienen derecho a un tipo de educación que responda a sus propias condiciones y que esté abierto a las relaciones fraternas con los otros pueblos para fomentar en la tierra la unidad verdadera y la paz (cf. *Gravissimum educationis*, 1). Ese derecho debe ser atendido «teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna» (*ibid.*, 7), o lo que es lo mismo, dando opción a los di-

versos modelos educativos que, de hecho y de derecho, se dan en la sociedad actual.

Concretamente, el derecho a educar y a ser educado se realiza mediante la aplicación de un proyecto educativo determinado, que ofrece el centro de enseñanza y acepta el alumno o sus representantes legítimos. A los padres, primeros educadores de la prole (cf. *Gaudium et spes*, 52; *Gravissimum educationis*, 3), corresponde escoger el tipo de educación que deba darse a sus hijos de acuerdo con sus convicciones en materia moral y religiosa (cf. *Dignitatis Humanae*, 5).

Cierto que cada vez resultan más extensos y evidentes los cometidos del Estado en materia educacional. Ya la encíclica «*Divini Illius Magistri*» le señala una doble función: garantizar y promover. Esto significa hacer viable —mediante los adecuados instrumentos legislativos y los recursos económicos que la sociedad pone en manos del Estado— la vigencia efectiva del derecho a ser educado que asiste a todo ciudadano, la libertad de los padres y, en su día, de los alumnos para elegir el proyecto educativo que mejor responda a su identidad, y la libertad de creación de centros de enseñanza por parte de personas e instituciones, en igualdad legal de deberes y derechos respecto a los centros estatales.

En la función estatal de «promover» entra lógicamente la de crear por sí mismo y estimular la creación, por parte de otras instancias intermedias, de centros de enseñanza a todos los niveles. Constituye un dato esperanzador el que en los presupuestos de muchos Estados, España entre ellos, el capítulo de la educación ocupe el primer puesto en la asignación de recursos. Ello es, a su vez, el resultado de sistemas fiscales progresivos y justos.

Es cierto que dentro del panorama educativo de no pocos países la enseñanza estatal u oficial, sobre todo en los niveles superiores, ha ido ampliando cada vez más su ámbito. Sin embargo, habría que hacer compatible la titularidad de los centros estatales con el ordenamiento académico de todo el conjunto educacional y con la distribución equitativa de los fondos presupuestarios, sin lo que difícilmente se pueden evitar indebidos monopolios.

No cabe duda, por otra parte, que corresponde al Estado vigilar sobre la calidad de la enseñanza, evitar que se desvirtúe por objetivos de lucro e impedir en sus causas el llamado clasismo escolar.

Muchos centros no estatales, incluidos los de instituciones religiosas, han sido objeto de esa acusación. Habría que analizar con objetividad si ello ha sido debido a preferencias por los sectores sociales económicamente acomodados o si no ha estado también determinado por una distribución discriminatoria del presupuesto educativo, que ha hecho pagar a las familias lo que correspondía al fisco.

En vista del costo creciente de una plaza educativa, se impone un gran realismo en esta materia. Hay que admitir que sólo muy pocos Estados podrán lograr los niveles de gratuidad que son de desear. En tal situación habría que sentar como principio-guía que los fondos de ayuda habrían de referirse más a la situación económica del alumno que a la titularidad u orientación del centro escolar elegido.

Por ello, al tratar de los agentes de la educación, resulta más adecuada y constructiva la óptica de los deberes que la de los derechos. En efecto, contraponer la familia a la escuela, los centros docentes del Estado a los de otras instituciones o personas, engendra frecuentes pleitos de competencias, si no de intereses, con perjuicio, en última instancia, de los educandos.

Es de alabar, por ello, que la Semana Social de Sevilla haya planteado el fenómeno educacional desde una plataforma de solidaridad, convergencia y servicio, todo esto en clave de libertad. Viene a secundarse de este modo la acertada posición de los obispos en España, quienes, con clarividente criterio pastoral, «en modo alguno desean que este tema llegue a convertirse en factor de división entre los españoles» (declaración de la XXVI Asamblea Plenaria, 14).

Si nos fijamos en los ejemplos de la historia, la labor educativa ha acompañado ordinariamente la acción evangelizadora de la Iglesia, tanto en los orígenes de la Europa cristiana como en la obra misionera de América, África y Asia. La fe cristiana ha mantenido relaciones de reciproca fecundidad con las diversas culturas y ha sido siempre un fermento en la vida personal y social.

La Iglesia ha servido a la educación a través de la escuela porque reconoce en ésta «un medio privilegiado para la formación integral del hombre, en cuanto que ella es un centro donde se elabora y se transmite una concepción específica del mundo, del hombre y de la historia» (La

*Escuela Católica, S. Congregación para la Educación Católica, 19 marzo de 1977).*

Es cierto que a la Iglesia le compete principal y específicamente la educación en la fe, a través de la catequesis, «cuyo ámbito normal es la comunidad cristiana» (cf. *La catequesis en nuestro tiempo*, Sínodo de los Obispos del 29 octubre 1977); pero «el proceso de la educación en la fe no se puede separar del proceso educativo general del hombre. Los padres de familia vienen por ello obligados a conseguir que la educación de sus hijos en la escuela incluya su formación moral y religiosa, en conformidad con la fe de la Iglesia» (Declaración de la XXVI Asamblea Plenaria del Episcopado Español).

Es obvio que para conseguir esa educación cristiana integral constituye un instrumento especialmente apto la escuela católica. Para ahondar en las perspectivas evangelizadoras y humanizantes que deben definir a estos centros, así como en la identidad de su proyecto educativo y en las responsabilidades de su servicio a la sociedad, remitimos al importante documento antes citado, emanado el pasado año de la Sagrada Congregación para la Educación Católica.

De él queremos recoger aquí estas palabras: «La Iglesia está plenamente con-

vencida de que la escuela católica, al ofrecer su proyecto educativo a los hombres de nuestro tiempo, cumple una tarea eclesial, insustituible y urgente. En ella, de hecho, la Iglesia participa en el diálogo cultural con su aportación original en favor del verdadero progreso y de la formación integral del hombre» (*ibid.*, 15).

Pero el ámbito de la educación en la fe no queda circunscrito ni a la comunidad eclesial, ni a la familia creyente, ni a la escuela confesional. Un sistema educativo que respete de veras las exigencias democráticas, hará un servicio a la libertad, y también al derecho de los padres y alumnos, ofreciendo espacio académico y oportunidades efectivas a la educación religiosa en el cuadro general de la enseñanza, según la pertenencia eclesial de los alumnos, y en estricto respeto a la libertad religiosa de éstos y de sus maestros. En un período de elaboración de una nueva Constitución, como el que vive ahora vuestra Patria, la solución idónea de este problema constituye un exigente desafío a la creatividad, a la colaboración de las diversas fuerzas sociales y de la Iglesia, en bien de la sociedad y de la paz religiosa.

[...].

**Declaración sobre la defensa de los derechos humanos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana del 15-III-1978 [«Ecclesia» del 8 de abril de 1978].**

1. La Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, que se celebra en Belgrado desde el otoño último, abordará durante estos días la última fase de sus deliberaciones. Se trata en esta Conferencia del examen de los «principios de la cooperación pacífica y confiada en Europa», que fueron solemnemente aprobados en Helsinki por 35 Estados.

Hemos reconocido ya la «Declaración universal de los derechos del hombre» de las Naciones Unidas y la «Convención para la protección de los derechos del hom-

bre y de sus libertades fundamentales» del Consejo de Europa. Al propio tiempo, los derechos fundamentales y las libertades fundamentales se encuentran ya integrados en las Constituciones de la mayoría de los Estados. Sin embargo, Helsinki se ha convertido en el símbolo de una mayor libertad de circulación para las personas, las ideas y las informaciones; y, sobre todo, para la garantía y la puesta en práctica de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.

2. En el nombre de Helsinki se han



cifrado muchas esperanzas. Los pueblos esperan la aplicación de los principios allí proclamados. La humanidad se ha tornado más sensible a la garantía, o, por el contrario, al rechazo, de los derechos del hombre y de las libertades, cuyo disfrute y libre empleo son parte integrante de la dignidad humana.

Sentimos un reconocimiento total hacia los múltiples esfuerzos de los que luchan por el derecho a la vida de sus semejantes. Pero existe también el peligro de que nos contentemos con juegos de palabras, deformadas por el empleo de sistemas particulares. La lucha por los derechos del hombre no debe ser falsificada por una imagen del hombre que se limite a intenciones políticas.

3. Por otra parte, la situación real es preocupante. Día tras día, los derechos del hombre son pisoteados en casi todas las partes del mundo: en África del Sur, pero también en algunas partes del norte de este continente; en América, en Asia, pero también entre nosotros en Europa, principalmente en los países bajo dominio comunista.

Un examen atento permite afirmar que el modo y la amplitud de las violaciones de los derechos del hombre varían considerablemente de país a país, y, con mucha frecuencia, incluso entre países vecinos.

Es necesario igualmente reconocer que todos los derechos del hombre no tienen la misma importancia. Hay derechos elementales, inalienables, y otros que no pueden ser alcanzados sino cuando los derechos elementales se realizan.

Es por estos derechos del hombre por los que nos comprometemos; principalmente por el derecho a la vida, a la libertad y a la justicia. Si nos comprometemos no es porque ello esté de moda, sino porque se trata de un mandamiento del Evangelio, un mandamiento de la humanidad, de la justicia y del amor. Nos comprometemos a causa de Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, crucificado y resucitado.

4. Uno de estos derechos del hombre es la libertad de religión y de creencia. Este compromiso, que asumimos en nombre del Evangelio, es «sin duda alguna un servicio prestado a la comunidad de los cristianos, pero también a toda la humanidad» (*Evangelii nuntiandi*, 1). La libertad de las conciencias, de creencia y de religión forma parte de los derechos fundamentales más elementales, y se deriva de la

dignidad de la persona humana. Todos los derechos fundamentales se basan en el hecho de que el hombre ha sido creado hijo de Dios, está orientado hacia Dios y es responsable ante El. Por esta causa, el hombre, en tanto que persona, es portador de los más grandes valores espirituales y morales. De ahí hace derivar su propio camino en responsabilidad delante de Dios. Es ahí, en definitiva, donde toman toda su dimensión, su dignidad y su especificidad en tanto que criatura de Dios.

5. El documento final de Helsinki ha abordado la libertad de religión en su principio VII:

«Los Estados participantes respetan los derechos del hombre y las libertades fundamentales, comprendidas la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicción para todos, sin distinción de raza, de sexo, de lengua o de religión.

En este marco, los Estados participantes reconocen y respetan la libertad del individuo de profesar y de practicar, solo o en común, una religión o una convicción actuando según los imperativos de su propia conciencia.

Los Estados participantes confirman que los cultos, instituciones y organizaciones religiosas, actuando en el marco constitucional de los Estados participantes, y sus representantes pueden, en el campo de su actividad, mantener entre sí contactos y encuentros e intercambiar informaciones».

Recordamos estos principios para prestar nuestro apoyo a aquellos cuyos derechos son violados. Estos principios son igualmente un fundamento normativo para la vida de la Iglesia.

6. Estas libertades son violadas hoy día de múltiples formas:

a) Esto se produce con frecuencia no sólo por razones de hostilidad hacia la religión o la Iglesia, sino también por otros motivos: motivos nacionales, sociales o racistas actúan en esta circunstancia y hasta prevalecen con frecuencia. Se podría hablar de una motivación «mezclada». Citemos algunos ejemplos:

— La situación en Irlanda del Norte nos preocupa y estamos aterrizados por las destrucciones del Líbano.

— Lamentamos que en algunos países de América latina los obispos y los sacerdotes, conmovidos por la miseria de los pobres, sean también perseguidos por el



poder, en razón de su compromiso al servicio de los oprimidos.

— Estamos consternados por los informes procedentes de numerosas regiones de África y del sudeste de Asia, principalmente del Vietnam, en donde, como resultado de las guerras y de los trastornos, las iglesias han sido cerradas; los creyentes, al igual que los oponentes políticos, han sido detenidos y condenados a muerte; los sacerdotes y los misioneros, expulsados, perseguidos y asesinados.

b) Al lado de estos casos, cuyas motivaciones son diversas, existen otros en donde la pertenencia a una religión concreta representa una razón determinante para un prejuicio o una persecución.

Todos tenemos en la memoria ejemplos de algunos países africanos. Con frecuencia hay discriminaciones, expulsiones y persecuciones únicamente por razón de ser hindú, musulmán o incluso —en algunos países de Asia y de África— cristiano. El Papa Pablo VI ha hablado del «drama de la fidelidad a Cristo»: «¡Cuántos cristianos, todavía hoy, son ahogados por una opresión sistemática, porque son cristianos, porque son católicos!» (*Evangelii nuntiandi*, 39).

c) Finalmente se da, sobre todo, una lucha del ateísmo contra la religión y contra los que creen en Dios.

Esta lucha se ha desencadenado en la mayor parte de nuestro globo. Existe un ateísmo militante en África, por ejemplo, en Mozambique; lo hay también en América latina, por ejemplo, en Cuba; existe en numerosos países de Asia, como en China, en Laos, en Camboya, y particularmente en la Europa del Este. Todos nosotros conocemos ejemplos.

Nos sentimos heridos en el corazón cuando oímos a los dirigentes de partido en los países de la Europa del Este enorgullecerse por el hecho de que «las dimensiones de la Iglesia han sido reducidas a un nivel tolerable». Nos sentimos consternados cuando oímos decir que los enfermos deben morir sin la asistencia de un sacerdote, no a causa de la falta de clero, sino frecuentemente a causa de las trabas de los funcionarios locales. Con espanto leemos que un periódico ruso conocido se queja de que «la juventud no ha sido todavía arrancada de la influencia de los padres creyentes», y que «en los

medios de comunicación social se utiliza muy poco material antirreligioso».

¿No es espantoso ver —sobre todo en los países del bloque del Este— que la educación de los niños en la fe sufre amenazas de retorsión; que, concretamente en la República Democrática Alemana, los creyentes son apartados de la enseñanza superior y de las posibilidades de promoción social únicamente a causa de su fe, e incluso son privados de su empleo?

Es lamentable y totalmente incompatible con las conclusiones de Helsinki que al clero en algunos países de la Europa del Este se le haya dividido, como resultado de una presión física y psíquica, y que se hayan creado asociaciones de sacerdotes dirigidas por el Estado, con la finalidad de engañar a los creyentes y conducirlos al ateísmo.

7. Ante todo esto, no podemos callarnos.

Por nuestra condición de cristianos, no nos corresponde juzgar. Pero tenemos el deber de hablar en favor de aquellos que son víctimas de la injusticia. Protestamos contra la opresión de los hombres y contra la reducción intencional de los derechos que les han sido dados por Dios.

Es necesario protestar contra la negación de las libertades fundamentales y la violación de los derechos del hombre en todas las partes en que esto se produce; no solamente allí donde no se corre peligro alguno, sino también cuando es necesario afrontar la cólera de los poderosos. No debemos tener miedo a los poderosos y no tenemos derecho a cerrar el oído ante los gritos de aquellos a quienes oprimen. Debemos llamar a la persecución por su nombre, y no tenemos derecho a callarnos por amor de nuestras comodidades o por cobardía.

Pensamos que, en definitiva, debemos ayudar a todos los hombres, comprendidos los que hoy día siguen luchando contra los creyentes. El Señor se hizo hombre por todos los hombres y murió sobre la cruz por todos nosotros.

8. ¡Ojalá que el Señor fortalezca a quienes se rechaza y oprime a causa de su fe! ¡Ojalá les dé la fuerza de resistir en la fidelidad durante el tiempo de la persecución!

Que ilumine a los que persiguen. Que les dé la gracia de comprender la injusti-

cia que cometen; de convertirse, como en otro tiempo lo hizo Saulo; y de reconocerle en su grandeza y en su bondad.

Que el Señor nos dé la fuerza de no ser cobardes y mudos ante la injusticia;

que nos dé la fuerza, por el contrario, de comprometernos, llenos de coraje y de perseverancia, en favor de los perseguidos y de los oprimidos, y de fortalecerlos con nuestras oraciones y nuestros sacrificios.

### **Nota de la Conferencia Episcopal Portuguesa de 6-IV-1978 sobre las modificaciones del derecho de familia.**

1. El día 1 del corriente mes de abril entró en vigor el decreto-ley número 496/77, del 25 de noviembre pasado, introduciendo diversas modificaciones en el Código Civil. Como, entre éstas, se encuentran sustanciales modificaciones del régimen de las relaciones familiares, pareció conveniente a la Asamblea Plenaria del Episcopado, reunida por vez primera después de publicado aquel decreto, llamar la atención de los fieles, invitándoles a hacer una lectura crítica de las nuevas disposiciones. Algunas de ellas muestran una orientación, ya seguida en la Constitución de la República y en otras leyes recientes, que se aparta profundamente de la doctrina de la Iglesia y del modo de ser y de pensar de nuestro pueblo. Sin descender a detalles de naturaleza técnica, apuntamos como ejemplos más significativos:

— La *protección jurídica del concubinato (unión de hecho)*, que, aun cuando el legislador la presenta como simple «esbozo de protección», aun así se debe considerar ética y socialmente injusta no solamente por la circunstancia de que alguien pueda aprovecharse de una situación inmoral, sino especialmente porque esa protección puede comprender casos en los que la entrega de alimentos sea impuesta a miembros de familia legítima, en particular los hijos, justamente ofendidos por el adulterio.

— Una *amplia facilidad del divorcio*, bien estableciendo una cláusula genérica susceptible de implantar progresivamente los motivos de ruptura, bien dando preferencia al divorcio por mutuo consentimiento, con sujeción del vínculo matrimonial al mero arbitrio de los cónyuges,

bien incluso sancionando la ruptura causada injusta y discrecionalmente por uno de ellos, sin exceptuar el abandono malicioso de la familia.

— La *reglamentación exagerada y formalista del principio de igualdad entre los cónyuges*, en situación de fomentar familiares discrepancias y el consiguiente recurso a los tribunales, con los inconvenientes que de ahí se derivan para la espontaneidad e intimidad de la vida doméstica.

— El *debilitamiento del vehículo de filiación procedente del matrimonio*, incluso más allá del principio constitucional de supresión de la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos.

De modo general, se puede afirmar que la concepción subyacente a la reforma ahora decretada padece, con frecuencia, de una actitud excesivamente legalista. Situaciones que, en la realidad, deben ser resueltas por la vida y por el amor, pasan a ser reguladas por la ley, lo que, por otra parte, sería lo de menos si, a la larga, los preceptos legales no ayudasen a crear modelos de conducta contribuyendo de esta forma a la disolución del espíritu de familia.

2. Los ejemplos aducidos, y otros que podríamos añadir, justifican la reserva que nos merecen las nuevas disposiciones. El proyecto de vida familiar en ellas reflejado es, en algunos de sus aspectos, reprochable tanto más que la desorientación de las ideas y la corrupción de las costumbres, de por sí, contribuyen poderosamente a la depreciación de los auténticos valores de la familia [...].

«La íntima comunidad de vida y de

amor conyugal (...) ha sido instituida por medio del contrato del matrimonio, es decir, con el irrevocable consentimiento personal. De este modo, por medio del acto humano con el cual los cónyuges se dan y reciben uno a otro, nace una institución en presencia también de la sociedad, confirmada por la ley divina. Con miras al bien tanto de los esposos y de la prole como de la sociedad, este sagrado vínculo no está sujeto al arbitrio de la voluntad humana. El propio Dios es el autor del matrimonio, el cual persigue diversos bienes y fines, todos ellos de la máxima importancia, bien para el provecho personal y destino eterno de cada uno de los miembros de la familia, bien, en fin, para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de toda la familia humana (...).

El hombre y la mujer, que por la unión conyugal «ya no son dos, sino una sola carne» (Mat. 1,6), se prestan ayuda recíproca y servicio con la unión íntima de sus personas y sus actividades, tomando conciencia de la propia unidad, que realizan más cada vez. Esta unión íntima, por ser la recíproca entrega de dos personas, exige, del mismo modo que el bien de los hijos, la total fidelidad de los cónyuges y la indisolubilidad de su unión» (*Gaudium et spes*, 48).

Estas palabras indican, en resumen, las líneas esenciales del matrimonio y de la familia.

En efecto, creada por Dios como «íntima comunidad de vida y de amor», la familia persigue bienes y fines, todos ellos de la «máxima importancia», lo mismo para los cónyuges que para los hijos, y para la sociedad en general. Pero eso sólo es posible si tanto las costumbres como las leyes respetan su santidad, su dinamismo, su solidez y su intimidad. A esta última se opone, como hemos dicho, la excesiva intromisión en el hogar de entidades extrañas a él, como la reglamentación, minuciosa y abstracta, de relaciones, las cuales, por encima de todo, deben estar inspiradas por la confianza y el afecto.

Por otra parte, sólo el matrimonio debe tenerse como fundamento y columna de la institución familiar, siendo, por ello, igualmente condenables, tanto la unión de hecho como las diversas experiencias llamadas de amor libre.

Por otro lado, también el contrato matrimonial es «irrevocable»; el vínculo con-

yugal «no está sujeto al arbitrio de la voluntad humana». Por consiguiente, la naturaleza del matrimonio es en absoluto incompatible con el adulterio y con el divorcio, acerca de los cuales también el Concilio Vaticano II declara en otro pasaje: «Ese amor conyugal, ratificado por la promesa de ambos y, sobre todo, sancionado por el sacramento de Cristo, es indisolublemente fiel, de cuerpo y de espíritu, en la prosperidad y en la adversidad; excluye, por ello, toda y cualquier especie de adulterio y de divorcio» (*Gaudium et spes*, 49).

Finalmente, los cónyuges, iguales entre sí, dándose y recibiendo el uno al otro, se deben «recíproca ayuda y servicio con la íntima unión de sus personas y actividades». Entre tanto, la igualdad de los cónyuges significa fundamentalmente su dignidad igual, y jamás debe ser origen de rivalidades o conflicto, ni hacer que se olviden las responsabilidades que la naturaleza atribuye específicamente al marido y a la mujer.

3. La salvaguardia de la familia no puede limitarse a la afirmación de los valores de la misma, ni mucho menos a simples críticas de prescripciones legales que contrarían tantos valores; cual sucede, en gran parte, con la nueva reglamentación que estamos estudiando.

La familia se defiende, principalmente, en la actuación real y concreta de la vida, iluminada siempre por los principios de la ley natural y de la revelación divina. Es ahí precisamente donde corresponde especialmente a los cristianos dar un testimonio inequívoco de fidelidad y de respeto por esta institución, sagrada por su origen e imprescindible para la plena realización, tanto de sus miembros como de la sociedad.

Al Estado corresponden también graves obligaciones; además, por expreso imperativo constitucional. Es indiscutible la necesidad de una política urgente en favor de la familia, garantizándole independencia económica y habitación condigna; organizando las condiciones de trabajo a fin de favorecer la estabilidad y la cohesión de la vida doméstica, dando a los padres la posibilidad de educar libre y convenientemente a los hijos y combatiendo la degradación de la vida social al significar una amenaza creciente para el sano desarrollo de nuestra juventud.

Las crisis y fuertes tensiones que desequilibran actualmente nuestra vida colectiva no podían dejar de influir negativamente en el conjunto familiar. Suscitar, pues, en la sociedad portuguesa nuevas oportunidades de concordia, de prosperidad, de salud moral y de justicia será,

sin duda, trabajar en favor de la dignificación y robustecimiento de la familia. De la misma manera que trabajar por la dignificación y consolidación de la familia será, a su vez, el medio más eficaz y seguro de conseguir el bien de la comunidad nacional.

**Declaración sobre los derechos humanos adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de abril de 1978 en su 62.ª sesión.**

*Los Estados miembros del Consejo de Europa,*

1. Teniendo presente su adhesión a los principios que rigen toda democracia parlamentaria y su compromiso, en virtud del estatuto del Consejo, de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales;

2. Considerando que el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en vigor ya desde hace veinticinco años, ha dado una expresión concreta a este compromiso asegurando la garantía colectiva de una parte de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea general de las Naciones Unidas hace treinta años, debido en particular a su mecanismo de control basado en criterios objetivos y confiado a unos órganos independientes;

3. Considerando que en virtud de este convenio europeo, se le concede una protección internacional eficaz a toda persona que depende de la jurisdicción de los Estados contratantes, lo cual implica una protección sin consideración de la nacionalidad o del lugar de residencia;

4. Convencidos de que la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, tanto a nivel nacional como internacional, representa una labor continua, y que los derechos indi-

viduales que se derivan de la dignidad de la persona humana conservan su valor y su importancia primordiales a través de las mutaciones y de la evolución de la sociedad;

5. Persuadidos de que es primordial que los órganos instituidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos sigan siendo un medio efectivo de garantizar el respeto de los compromisos que de él resultan;

6. Recordando, además, que en el seno del Consejo de Europa se examinan proposiciones que tienden a ampliar las listas de los derechos individuales que deben proteger el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otras convenciones europeas apropiadas, incluidos los derechos en los ámbitos social, económico y cultural;

7. Señalando a este respecto la primera contribución aportada por la Carta Social Europea en el ámbito de los derechos sociales y económicos y dispuestos a examinar la posibilidad de ampliar aún más la protección de estos derechos en el marco del Consejo de Europa;

8. Conscientes de la estrecha relación existente entre la protección y la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales dentro de los Estados y el fortalecimiento de la justicia y de la paz en el mundo,

I. REAFIRMAN la importancia del papel del Convenio Europeo de Derechos Humanos en la protección internacional de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y en su ejercicio efectivo, en Europa;

II. DECIDEN conceder prioridad a los trabajos emprendidos en el seno del Consejo de Europa a fin de explorar las posibilidades de ampliar las listas de los derechos individuales, en particular de los derechos en los ámbitos social, económico y cultural, que debieran estar protegidos

por convenciones europeas o cualquier otro medio apropiado;

III. SE COMPROMETEN a participar en la protección y en el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales incluidos, en un sentido más amplio, los derechos pertenecientes a los ámbitos social, económico y cultural, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz y de la seguridad mundiales y de la cooperación internacional así como al progreso económico y social de todos los pueblos.

**Mensaje de los obispos italianos de 31-V-1978 sobre la violencia [«Ecclesia» del 17 de junio de 1978].**

[...].

1. Hemos dedicado la más viva atención a las tragedias recientes y actuales vividas con nuestras poblaciones.

Dichas tragedias no son otra cosa sino la explosión violenta de una degradación moral que trastorna profundamente el sentido de la existencia y las reglas elementales de la convivencia en el momento mismo en que niega la presencia de Dios y ahoga la voz auténtica de la ley escrita en el corazón de los hombres.

Hemos hablado de ellas incansablemente en los últimos tiempos, invitando a reconocer y a eliminar con valor las raíces ideológicas y sociales de tanta desintegración moral. Es el hombre el que muere cuando se minimiza el sentido de Dios y la ley del amor que de El procede.

2. Sin embargo, un hecho nos ha parecido indiscutible y de buen augurio para el futuro, a saber: el hecho de que el pueblo italiano, situado ante el terrorismo, ha reaccionado con la condena de toda violencia y con el testimonio moral en favor del valor sagrado e intangible de la vida humana.

En lugar de someter los espíritus a la

rendición, la gente se ha unido y ha provocado una elevación improvisada del talante espiritual de la nación: en los sentimientos humanísimos de las personas sencillas, en las preocupaciones de los hombres más responsables, en los comentarios de gran parte de la prensa, en las oraciones de los creyentes.

Y todos han sentido resonar en los gestos del Santo Padre las vibraciones más auténticas de la Iglesia y, más aún, de la humanidad. Las verdades más intuitivas y permanentes del cristianismo han aparecido como innatas a la sensibilidad popular.

Con esta alma popular, a la que la Iglesia, en primer término, presta amplio crédito, se puede contar en el futuro. Aquí el Evangelio de Cristo se siembra y se reactiva diariamente, a fin de que puedan desarrollarse nuevas posibilidades de vida para la familia humana.

3. Nos parece también constituye un deber subrayar que si el pueblo italiano ha hecho frente a una de las pruebas más duras de su historia contemporánea, ello es debido a la innata estima que por la persona humana tienen las gentes.

La ley del «no matar» es un logro ele-

mental de la conciencia, es enseñanza fundamental de la fe cristiana, es premisa intangible para un verdadero progreso moral y social.

Lo hemos dicho muchas veces y ahora lo repetimos con más fuerza: el aborto provocado es el asesinato de un ser humano inocente e indefenso.

La vida del hombre no está en poder del hombre, sino solamente de Dios. Incluso por parte de cuantos se dicen no creyentes, la vida humana se defiende, no se ofende; se sirve, no se oprime; se conserva, no se destruye.

Ahora, frente a la legalización del aborto, que con tanta obstinación se ha querido introducir también en nuestro país, la Iglesia no se resigna; no puede resignarse [...].

Obligada es, además, la objeción de conciencia por parte del personal sanitario y que ejerce la actividad auxiliar.

Sobre estas complejas cuestiones, nosotros mismos no dejaremos de volver pronto, con la certeza de que la conciencia popular sabrá reaccionar con elevado sentido humano y cristiano ante este manifiesto desprecio de la vida [...].

#### **Declaración del episcopado italiano con motivo de la ley sobre el aborto [«L'Osservatore Romano» del 1 de junio de 1978].**

La ley del Estado sobre el aborto, entrada en vigor el 6 de junio de 1978, nos obliga a todos a serias reflexiones.

1. Nunca ninguna ley humana podrá suprimir la ley de Dios.

2. Desde su concepción en el seno materno, toda criatura humana tiene derecho a nacer.

3. El aborto voluntario y provocado, ahora autorizado por la ley italiana, es manifiestamente contrario a la ley natural escrita en el corazón del hombre y expresada en el mandamiento: «No matarás».

4. Todo aquel que realice un aborto o coopere en él directamente, aunque sólo fuera con un consejo, comete un pecado grave que clama venganza ante Dios y menoscaba los valores fundamentales de la sociedad humana.

5. El personal médico y paramédico, y el de los servicios sanitarios tienen la

grave obligación moral de acogerse a la objeción de conciencia prevista por el artículo 9 de la ley.

6. Por sí mismo, el fiel que incurre en «el abominable crimen del aborto» (Concilio Ecuménico Vaticano II, *Gaudium et Spes*, 51) se excluye en el acto de la comunión con la Iglesia y se ve privado de los sacramentos (véase Código de Derecho Canónico, cán. 2350, § 1; 855, §1).

7. A la mujer embarazada que tenga dificultades, hay que brindarle una ayuda efectiva: comprensión y asistencia en el seno de la familia y de la comunidad cristiana y, en particular, centros de consulta que tengan una sana inspiración moral.

8. Se impone con urgencia la necesidad de un nuevo esfuerzo para formar en el respeto a la vida humana en todas sus etapas, negándose a toda forma de violencia moral, psicológica y física.

[...].



**Declaración del Cardenal Ugo Poletti, Vicario General de Su Santidad para la diócesis de Roma, del 6 de junio de 1978, sobre objeción de conciencia contra la ley italiana legalizando el aborto [«L'Osservatore Romano» del 7 de junio de 1978].**

La ley intitulada «Normas para la protección social de la maternidad y sobre la interrupción voluntaria del embarazo» publicada en la *Gazzetta Ufficiale* del 22 de mayo de 1978, n. 194, legaliza el aborto en Italia a partir del 6 de junio de 1978, y prevé que debe ser aplicada obligatoria y gratuitamente por los organismos públicos.

La prensa —que ha dado muy poco eco a las reacciones de protesta provenientes de todos los sectores y niveles de la opinión pública— ha concentrado su escandalizada atención en la toma de posición de la Iglesia católica, como si se tratara de una indebida ingerencia de la autoridad eclesiástica en lo que sería una cuestión puramente legislativa y civil.

Conviene recordar que la interrupción voluntaria de la vida va en contra de la ley tanto natural como divina. Por ello, la Iglesia siempre ha defendido la vida en todo tiempo y lugar y seguirá siempre defendiéndola en el futuro por todos los medios posibles, para evitar el aborto, tanto clandestino como legalizado.

El aborto viene presentado como una conquista de la sociedad y una promoción de la mujer. Pero la misma ley abortista se ve obligada a reconocer el grave trauma moral producido por la facultad de matar que se concede, y por consiguiente se ve obligada a reconocer el derecho a la objeción de conciencia para aquellos que no quieran incurrir en un crimen tan grave.

Así, aunque, valiéndose de una ley moral ciertamente inícuca, algunos puedan atreverse a afirmar que el aborto se ha transformado en algo legal, no por ello deja de ser verdad que la mujer nunca podrá borrar de su mente este recuerdo: he matado a mi hijo. Tampoco podrán eludir esta responsabilidad los que hayan aceptado colaborar en ese crimen, directa o incluso indirectamente. En efecto, la ley humana no puede borrar la ley natural ni la ley divina para las cuales el aborto es siempre una culpa para todos y, para los creyentes, un grave pecado condenado por la Iglesia y sancionado con la excomunión (CIC, canon 2350).

Un laicismo mal entendido hace decir a

muchos que el legislador civil debe poder legislar prescindiendo de consideraciones de fe o de religión.

Pero ninguna ley humana puede ir en contra del orden natural, como en el presente caso en que una vida inocente e indefensa se ve expuesta a la violencia y a la arbitrariedad del más fuerte. En efecto, este orden, aunque no tiene el alcance del orden sobrenatural, coincide siempre con el orden providencial de Dios.

La nueva ley sobre el aborto, porque menoscaba el orden natural, menoscaba a la persona humana y a su dignidad. Dios advierte a los hombres por medio de esta Iglesia que instituyó, no para su propia defensa, sino para la salvación completa de la humanidad.

El Concilio Vaticano II afirma que: «la vida debe ser protegida con sumo cuidado desde su concepción: el aborto y el infanticidio son crímenes abominables». E indica las razones: «Que todos tengan presente que la vida humana y la misión de transmitirla no se limitan a este mundo y no encuentran en él ni su plena dimensión ni su pleno sentido, si no es con la mirada siempre puesta en el destino eterno de los hombres». (*Gaudium et Spes*, 51).

Contra el aborto legalizado, la Iglesia tiene pues el derecho y el deber, en nombre de Dios, de tomar el partido del hombre, aunque éste, más o menos inconscientemente, reivindique la libertad mal entendida de dañarse a sí mismo.

Por lo tanto, para la Iglesia en Italia y para todo cristiano empieza un tiempo de compromiso intenso y múltiple y de mayor responsabilidad para defender y promover el pleno valor humano, religioso y sagrado de la vida, en primer lugar enseñando a los hombres, desde su más tierna infancia, en la escuela, en la familia, en la vida social, a respetar la vida y a oponerse a todas las manifestaciones de violencia moral o física. Después, favoreciendo todas las iniciativas y las acciones destinadas a proteger la vida naciente, a ayudar a las madres en dificultad o abandonadas a sí mismas; favoreciendo la adopción, la promoción de consultorios católicos de la familia y la presencia cristiana en los cen-

tros municipales de consulta. Y también ayudando a las madres que hayan sufrido el trauma del aborto a recobrar la confianza, con un arrepentimiento sincero, en la misericordia divina y en la vida que continúa.

Por fin, no hay que olvidar que si, en derecho, la calificación moral que merece el aborto es suficientemente clara, ahora que está legalizado por la ley, plantea casos de conciencia complejos que los creyentes y los hombres de conciencia recta no pueden ignorar. Deben en el acto, plena y conscientemente valerse del derecho a la *objección de conciencia*.

A esta objeción de conciencia que, sobre todo hoy, resulta ser un grave deber, invito paternalmente a todo el personal del mundo sanitario. Que los miembros del cuerpo médico o paramédico o, de manera más general, todos aquellos que ejercen actividades auxiliares tomen conciencia de que tienen el deber de manifestar su cristianismo, o por lo menos de respetar y de observar los principios más elementales de la ley natural.

Con este fin se deberán observar las normas que publicamos a continuación. [...]

#### *Principios de comportamiento*

1. El aborto provocado es siempre un crimen contra la vida, cualquiera que sea su motivación.

2. La ley que pretende legalizar el aborto es inmoral por sí misma y no excusa de grave culpa al que a ella recurre. Para los creyentes, el aborto es un pecado grave, particularmente condenado por la Iglesia y que conlleva la sanción especial de excomunión (CIC, can. 2350).

3. Cualquiera que sea el momento y el lugar en el que se procede a un acto abortivo, todo individuo, como ciudadano y en nombre de la libertad religiosa, tiene derecho a ver reconocida y respetada plenamente su objeción de conciencia, sin que por ello tenga que sufrir consecuencia alguna.

4. Toda colaboración formal o sustancial en el aborto (contribución voluntaria y con intención de matar, por parte de cualquiera) está prohibida por la ley natural misma.

5. La colaboración material mediata a la preparación y a la ejecución del acto abortivo, si es impuesta, no está permitida más que si su negativa causara a los miembros del personal sanitario que se han acogido a la objeción de conciencia (personal médico, paramédico y todos los que trabajan en el mundo sanitario) perjuicios proporcionados a la prestación exigida.

6. El personal sanitario auxiliar tiene derecho a ser previa y lealmente informado de la finalidad de las prestaciones profesionales que se le piden.

7. No es lícito participar en los cursos previstos a nivel regional con el fin de formar personal competente para las intervenciones abortivas.

8. Los médicos deben dar a las pacientes informaciones exactas sobre su estado de salud y el del feto, pero nunca pueden aconsejar el aborto.

9. El personal sanitario, no obstante, no puede negarse a asistir con los debidos cuidados a las que ya se han sometido a un acto abortivo.

[...]

#### **Nota de la Comisión Episcopal de Enseñanza (España) de 27-VI-1978 sobre los derechos fundamentales en la educación.**

[...]

1. El derecho a la educación es un derecho fundamental de toda persona humana.

Las garantías jurídicas de este derecho

han de configurarse de tal forma que queden a salvo la libertad y la justicia.

2. Al hablar de libertad de enseñanza nos referimos, ante todo, al derecho de los padres a elegir el tipo de educación

que prefieren para sus hijos, según sus propias convicciones. En esa libertad está en juego un derecho fundamental del hombre, que es anterior a cualquier ordenamiento jurídico y político y a cualquier ideología. El hombre tiene derecho a ser educado en orden al pleno desarrollo de su personalidad, y tan personal es este derecho —ejercido a través de la tutela de los padres mientras se necesita de ella— que ninguna otra instancia social distinta del educando y de sus padres puede intervenir en el proceso educativo, sino como cooperadora en el mismo. Tan primario e inalienable es este derecho que de él depende la posibilidad jurídica de cada hombre de decidir libremente su destino. Este derecho a la libertad en el proceso educativo, en su sustancia jurídica, es anterior a la inserción del hombre en la sociedad y en la Iglesia.

3. El derecho a la educación como derecho a ser educado en libertad, no queda tutelado suficientemente con sólo garantizar a los padres el derecho de elegir para sus hijos una educación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. El conjunto de las enseñanzas debe transmitir una concepción del mundo, del hombre y de la historia que se integre armónicamente en aquellas convicciones morales y religiosas o que al menos las respete. Esto supone que el proceso educativo, sobre todo en las etapas de la educación de niños y adolescentes, debe responder a un proyecto coherente. El derecho de los padres en materia educativa no se reduce a la enseñanza moral o religiosa, sino que incluye el derecho a elegir el tipo o modelo de educación integral que responda a sus convicciones sobre el sentido último de la vida y el derecho a elegir el centro escolar capaz de impartirla.

4. El derecho a la educación como derecho de todos, que permita a cada uno realizarse plenamente según sus capacidades, requiere ante todo una escolarización total y de calidad suficiente. Es un imperativo de la justicia social que no podrá conseguirse sin una atención preferente a los niveles educativos básicos y a las regiones y zonas más deprimidas. La aplicación del principio de igualdad de oportunidades por parte de la sociedad, y especialmente por parte del Estado en la política educativa, hace inadmisibles toda discriminación de los ciudadanos por razones económicas o sociales.

5. Ahora bien, el derecho de todos a la educación no se opone al derecho de todos a la libertad en la elección del modelo educativo. El derecho de los padres de familia a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos debe ser garantizado de tal manera que no se beneficien ni exclusivamente ni en primer lugar quienes disponen de más recursos económicos. Un ordenamiento jurídico fundamental de la enseñanza ha de tutelar eficazmente tanto la libertad como la igualdad en el derecho de todos a la educación.

6. Nos parece que los principios someramente expuestos exigen que el Estado establezca centros escolares con diversos proyectos educativos, de conformidad con las diversas demandas de los ciudadanos. Al menos y en todo caso, debe garantizar dos cosas: que se respete la conciencia de los educandos por parte de los educadores en todos los centros y que se estimulen las iniciativas de la sociedad en la creación de centros escolares que, sin fines de lucro, estén, con sus diversos proyectos educativos, al servicio de la extensión de la enseñanza y de la educación de todos los ciudadanos dentro del efectivo e indiscriminado reconocimiento a la libertad de todos.

7. Conforme a lo dicho, se cometería una grave discriminación que afectaría a las conciencias si la financiación de los centros docentes con fondos públicos quedase legalmente subordinada a unas fórmulas de organización escolar que no garantizaran el respeto al derecho de los padres a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos. Un aspecto de este derecho es el de la necesaria convergencia en la orientación del centro educativo. A ello se opondría la introducción del pluralismo ideológico en la enseñanza en contra de la voluntad de los padres.

Si, además, se hiciera del pluralismo ideológico en su vertiente política el criterio básico de la actividad docente, se correría el riesgo de aplicar a cada centro el esquema formal de la organización política como principio interno de la comunidad escolar y del proceso educativo, con sus consecuencias de lucha por el poder y de enfrentamiento de grupos. Todo ello equivaldría, en la práctica, a la neutralización e incluso a la eliminación de la escuela como institución educativa.

8. Con las anteriores consideraciones pretendemos solamente, con honda sinceridad, llamar la atención de los cristianos —sea cual sea su posición política y el nivel de su responsabilidad cívica— acerca de una cuestión tan entrañada en los derechos básicos de la persona y de la sociedad como es la educación.

9. Fieles a estos principios, todos estamos obligados a colaborar en la insoslayable, aunque delicada tarea de transfor-

mar la escuela de modo que responda a las exigencias de la dignidad humana y a las necesidades de nuestra sociedad. La concepción cristiana de la vida nos empuja igualmente a promover una escuela que ayude a todos, especialmente a los creyentes, a desarrollar actitudes de solidaridad y de participación, sensibilidad para la justicia social y para la libertad, capacidad crítica y espíritu de diálogo y, sobre todo, el amor fraterno conforme a las enseñanzas del Evangelio.

**Discurso de Paulo VI dirigido al Director Ejecutivo del UNICEF el 29-VI-1978 [«Ecclesia» del 15 de julio de 1978].**

Señor director ejecutivo:

Con la proximidad del Año Internacional del Niño estamos realmente feliz al recibirle. Le saludamos como director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, sabedor de que a su organización le ha designado la Asamblea general como la agencia primaria para el Año Internacional.

Deseamos manifestar de una vez cuánto apreciamos el gran bien que UNICEF ha proporcionado a través de los años para los niños del mundo. Hemos, de corazón, defendido todas vuestras valiosas actividades buscadas para proveer a las necesidades básicas de los niños, mientras, al mismo tiempo, hemos expresado repetidamente nuestro disgusto por una involución en proyectos que pueden, directa o indirectamente, favorecer la anticoncepción, el aborto u otras prácticas que no respetan el supremo valor de la vida.

Con relación al Año Internacional del Niño, por lo que hace a la Santa Sede, tal acontecimiento no será ocasión de iniciativas múltiples que no tengan directa conexión con el bienestar de los niños. A la Santa Sede le place notar que el mismo sentimiento lo ha manifestado la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas al determinar los objetivos generales del IYC, cuando «encarece la vigilancia de las necesidades especiales de los niños de parte de los agentes de decisión o del público». (Resolución de la Asamblea General A/31/169, de 21 de diciembre de 1976, párrafo operativo 2).

El interés de la Iglesia en este asunto está en armonía con su constante solicitud a través de centurias por el bienestar de los niños. Su solicitud es una expresión de su fidelidad al programa establecido para ella por su fundador, Jesucristo, quien determinó que «el que no recibe el Reino de Dios como un niño no entrará en él» (Luc. 18, 17). Ante todo, Cristo identifica al niño con su propia persona: «Quien recibe a uno de estos niños en mi nombre a mí me recibe» (Marc. 9, 37). Para la Iglesia católica, pues, servir al niño no es un fin transitorio, sino más bien una tarea permanente investida de dignidad y constante prioridad.

La renovación concerniente a las reales necesidades de los niños siempre está además dictada por un saber realista de la presente situación del mundo. A despecho del progreso técnico, calladamente sufren los niños y mueren por falta de la nutrición básica o víctimas de la violencia y conflictos armados que no pueden comprender. Otros son víctimas del olvido emocional. Hay pueblos que emponzoñan las mentes de la juventud volcando sobre ellos prejuicios e ideologías vacías. Y hoy hay niños explotados; alguna vez hasta el punto de usarlos para satisfacer las más bajas depravaciones de los adultos. Un aspecto despreciable de esta explotación es que está a menudo controlada por fuerzas poderosas motivadas por el afán financiero.

Extendiendo nuestra mirada callada más allá, sobre la situación del mundo, vemos

que existe otra peligrosa discriminación a la que está sujeto el niño y que, con razón, comprometerá la actuación del IYC. En nuestra época, algunos pueblos consideran al niño una carga y una restricción de libertad más que la viva expresión del amor de los padres. Otros niegan al niño el derecho fundamental a tener una madre y un padre unidos en matrimonio.

Pero toda sociedad debe con vigor reconocer que el niño tiene verdaderamente el derecho dado por Dios a nacer, a una madre y un padre unidos en matrimonio, a hacerlo dentro de una familia normal. Habrá una forma de contradicción si con ocasión del Año Internacional del Niño, se promueven actividades cuya inspiración y propósito son producir niños privados de bienvenida o prevenirles de nacer dentro de la sociedad.

En orden a cumplir un propósito, este Año está llamado a promover el inestimable valor del niño en el mundo de hoy: el niño es niño como persona humana, y no simplemente como adulto potencial. La niñez es una fase esencial de la vida humana, y cada niño tiene derecho a vivir su niñez de un modo pleno y a contribuir a la humanización de la sociedad, a su desarrollo y renovación. Corre a cargo de nuestra conciencia personal esta contribución de los niños al mundo. ¿A quién no ha impresionado la sencillez del niño, la percepción directa o inocente de situaciones, su abierta y amorosa generosidad, su falta de prejuicios y discriminación, un gozo contagioso y sentido espontáneo de hermandad y también su capacidad notable de sacrificio e idealismo?

La Iglesia, por esto, sostiene que todo niño es una persona humana y tiene derecho a la promoción integral de su per-

sonalidad. El papel de la familia es irremplazable atendiendo a su fin, ya que el niño no puede ser comprendido ni asistido fuera de la familia, que es siempre el primer educador del desenvolvimiento físico, psicológico, intelectual, moral y religioso. Deseamos animar a que se procuren extender los servicios a favor de los niños y desarrollar su calidad, sobre todo con base permanente.

En todos estos esfuerzos, el niño permanece como el foco central: cada niño y todo niño a través del mundo. Confiamos en que nuevos y revitalizados encuentros florecerán para ayudar a niños indigentes en todas partes. Y estamos convencidos de que en esta vía se satisfarán las profundas exigencias de la juventud y de las personas humanas vulnerables: en primer lugar, el derecho a la vida, a la verdad, al amor.

Nos complace advertir que muchos católicos individuales, organizaciones e iglesias locales hayan tomado parte en la preparación del IYC. Su contribución efectiva servirá para volverlos a dedicar —en el espíritu de fidelidad al divino mensaje— a las necesidades del niño y a desarrollar programas apropiados que ayudarán a los niños en los varios aspectos de sus vidas. Esperamos que tales programas presten particular prioridad a las necesidades de los niños desventurados, los físicos o mentalmente disminuidos, los abandonados y los que se hallan en situaciones especiales de angustia y sufrimiento.

Con estos sentimientos, rogamos a Dios las bendiciones sobre todos los que trabajan para promover estos altos ideales y pedimos que el Señor lo sostenga a usted y a todos los que colaboran en su magna obra de solidaridad humana.

#### Exhortación de Paulo VI de 16-VII-78, sobre el derecho de expresión en materia política [«Ecclesia», del 29 de julio de 1978].

Era ya nuestra intención dedicar la breve exhortación del domingo venadero al despertar de la conciencia moral, invitada por la madurez de su reflexión sobre la nueva página que, en la vida de Europa, han abierto ante la historia contemporánea

las solemnes declaraciones de Helsinki, con claro sentido de compromiso renovado ante la conciencia, no sólo de cada uno de los ciudadanos, sino más aún ante la conciencia colectiva de los pueblos, y no solamente considerados en su invariable

soberanía individual, sino también felizmente solidarios entre sí, en busca de un bien progresivo, y común de la humanidad. Helsinki, en cuyas reuniones también participó la Santa Sede con atención amorosa y solícita, quiere ser un momento decisivo y progresivo de la civilización humana.

Pero he aquí que la celebración de procesos, de los que habla toda la prensa, nos obliga también a expresar nuestra aflicción no por pasión polémica, sino para confirmar nuestra confianza en la coherente y progresiva madurez del sentido moral en toda la humanidad.

Nos sentimos obligados ante las condenas infringidas con gran severidad a personas acusadas, como es persuasión común, de infracciones ideológicas, y también a causa de nuestros compromisos aceptados en Helsinki, a formular un llamamiento a aquel espíritu de carácter humano, que consideramos nuestro.

Incluso teniendo en cuenta que cuando no disponemos de una información completa no es fácil, en modo alguno, formular juicios, nadie puede dejar de sentirse afectado por la reacción unánime. Dicha reacción es alentada a causa de la falta de publicidad en torno a los procesos, por la sensación de que los derechos de defensa no han encontrado suficiente amparo,

por la desproporción entre penas y acusaciones, pero, sobre todo, por el convencimiento —ahora ya patrimonio universal de la cultura y de la sociedad— de que una opinión política o la reivindicación de un derecho propio no pueden, como tales, ser perseguidas y castigadas como delito.

¿Es un abuso, es una interferencia esta solidaridad que se propaga más allá de las fronteras cuando están en juego los derechos del hombre? ¿O no es más bien una señal de participación humana en un ideal que va penetrando a todos los niveles en sintonía con el reconocimiento que el mismo encuentra en solemnes documentos internacionales?

Justamente, porque nos parece que semejante sensibilidad es un elemento no subversivo, sino promotor de relaciones entre los hombres y entre los pueblos, querríamos sacar de la misma un auspicio: que aquel gran país, aquel pueblo cuya extraordinaria riqueza humana es conocida, y al que se dirige con respeto nuestro pensamiento, que todos los países y los pueblos del mundo puedan encontrarse unidos en un homenaje común y en la afirmación práctica del gran ideal de los derechos del hombre. Y que el sufrimiento de los condenados y de sus familiares, a los cuales dedicamos también la oración de hoy, se convierta en un bien más sublime para su país y para la humanidad.

**Mensaje de los Ordinarios del Congo sobre la libertad [«La Documentation Catholique» del 5 de noviembre de 1978].**

[...] Puesto que la dignidad humana exige que el hombre actúe según sus convicciones, la sociedad debe permitir a cada hombre actuar según sus convicciones; por lo menos mientras sus acciones no vayan en contra del orden, de la paz y de la prosperidad públicas. Nos alegramos de vivir en un país que ha inscrito este principio en su constitución y en su acta fundamental y que ha ratificado la

Carta de las Naciones Unidas que afirma este mismo principio. Sin embargo, pedimos que este principio sea también aplicado efectiva y equitativamente. No sólo es válido para las grandes Iglesias sino también para las que son más minoritarias.

La libertad religiosa no sólo implica la autorización de celebrar el culto en el interior de los edificios parroquiales. También implica el derecho a afirmar la fe en



todas las circunstancias de la vida: en casa, en la vida familiar, en el trabajo, en los momentos de ocio... siempre que se mantengan a salvo las justas leyes que rigen el orden público.

La libertad religiosa también implica el derecho de los ciudadanos, luego también de los cristianos, a asociarse en agrupaciones que tienen como objeto la animación espiritual de la vida, la ayuda caritativa u otros propósitos honestos y constructivos para la sociedad.

La libertad religiosa permite a los padres comunicar la fe a sus hijos. El hombre y la mujer no son sólo procreadores sino padres a quienes incumbe en primer término la educación de los hijos. Los padres no sólo tienen que dar a sus hijos el cuerpo sino también el corazón. Nadie tiene derecho a arrebatar esta prerrogativa a los padres. Si alguien lo hiciera, quitaría a los padres gran parte de su digni-

dad humana. El papel de los poderes públicos, como el de la Iglesia por lo demás, es el de ayudar a los padres en su función de educadores y no el de aprovecharse de su debilidad para inculcar a los niños una forma de pensar que no aprueban los padres. Agradecemos a los poderes públicos el que tengan la sabiduría de autorizar la enseñanza religiosa, dentro de la parroquia, en los barrios y en los pueblos. Si ha habido algunos problemas —raras veces, es cierto—, pensamos que se deben a ciertas personas mal informadas y al celo intempestivo.

La libertad religiosa implica también la exclusión de toda discriminación basada en la religión. Así, por ejemplo, el negar a los cristianos ciertos puestos de trabajo, en razón de su fe cristiana, sería contrario a la libertad de las conciencias [...].

**Alocución de Juan Pablo II dirigida el 30-X-1978 a los participantes en el III Congreso Internacional de la Familia [«Ecclesia» del 18 de noviembre de 1978].**

Constituye siempre una alegría para el Papa recibir a padres y madres de familia, plenamente conscientes de sus responsabilidades de educadores cristianos. Y es una suerte ver que surgen hoy día, en la Iglesia, numerosas iniciativas de apoyo a las familias.

Ante vosotros, no tengo necesidad de insistir sobre el papel primordial de la familia en la educación humana y cristiana. El reciente Concilio, en muchos de sus textos, ha puesto afortunadamente de relieve la misión de los padres, «primeros y principales educadores», difícilmente sustituibles (declaración *Gravissimum educationis*, número 3). Constituye para ellos un derecho natural, porque han dado la vida a sus hijos; es también la mejor forma de garantizar una educación armónica, en razón del carácter totalmente original

de las relaciones padres-hijos, y de la atmósfera de afecto y seguridad que los padres pueden crear, en la irradiación de su propio amor (Cfr. Const. *Gaudium et spes*, número 52).

La mayoría de las sociedades civiles, por su parte, han debido reconocer el papel particular y necesario de los padres en la primera educación. En el plano internacional, la «Declaración de los derechos del niño», que es, al menos, la señal de un amplísimo consenso, ha admitido que el niño «debe, en la medida de lo posible, crecer bajo la salvaguardia y la responsabilidad de sus padres» (principio 6). Anhelamos que este compromiso se traduzca cada vez más en hechos, sobre todo durante el año internacional del niño, que va a comenzar muy pronto [...].

**Discurso de Juan Pablo II en la audiencia general del 8 de noviembre de 1978, sobre la justicia [«Ecclesia», del 25 de noviembre de 1978].**

Queridos hermanos y hermanas:

[...]

2. Hoy me corresponde hablar de la justicia. Es sin duda alguna una suerte que éste sea el tema de la primera catequesis del mes de noviembre. En efecto, este mes nos induce a fijar la mirada sobre la vida de toda la humanidad, con la perspectiva de la justicia final. Todos, en cierto modo, somos conscientes de que, teniendo en cuenta el carácter transitorio de este mundo, no es posible realizar la plena medida de la justicia. Sin duda las palabras tantas veces escuchadas: «No hay justicia en este mundo» son fruto de un simplismo demasiado fácil. Sin embargo, existe en ellas un principio de profunda verdad.

La justicia es, en cierto modo, más grande que el hombre, que las dimensiones de su vida terrena, que las posibilidades de establecer en esta vida relaciones plenamente justas entre los hombres, los ambientes, las sociedades y grupos sociales, las naciones y así sucesivamente. Todo hombre vive y muere con una cierta sensación de insaciabilidad de justicia, porque el mundo no está en condiciones de satisfacer hasta el fondo a un ser creado a imagen de Dios, ni en la profundidad de su persona ni en los diversos aspectos de su vida humana. Y así, mediante este hambre de justicia, el hombre se abre a Dios, que «es la justicia misma». Jesús, en el discurso de la montaña, lo expresó de forma muy clara y concisa cuando dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos sean saciados» (Mt 5,6).

3. Teniendo delante de los ojos este sentido evangélico de la justicia, debemos considerarla al mismo tiempo como dimensión fundamental de la vida humana sobre la tierra: vida del hombre, de la sociedad, de la humanidad. Esta es la dimensión ética. La justicia es principio fundamental de la existencia y de la coexistencia de los hombres, como también de las comunidades humanas, de las sociedades y de los pueblos.

Además, la justicia es principio de la existencia de la Iglesia como pueblo de Dios y principio de coexistencia de la

Iglesia y de las diversas estructuras sociales, en particular del Estado, como igualmente de las organizaciones internacionales. En este terreno amplio y diferenciado, el hombre y la humanidad buscan continuamente justicia: éste es un proceso permanente y un cometido de la máxima importancia.

Según las diversas relaciones y los diversos aspectos, la justicia ha obtenido, a lo largo de los siglos, definiciones más apropiadas. De aquí el concepto de la justicia conmutativa, distributiva, legal y social. Todo esto evidencia hasta qué punto la justicia tiene un significado fundamental para el orden moral entre los hombres en las relaciones sociales e internacionales. Se puede decir que el mismo sentido de la existencia del hombre sobre la tierra está unido a la justicia. Definir correctamente «cuánto es debido» a cada uno por todos y al mismo tiempo a todos por cada uno, «lo que es debido» («debitum») al hombre por el hombre en diversos sistemas y relaciones —definir y, sobre todo, realizar— es cosa grande por la que todo hombre vive y gracias a la cual su vida tiene un sentido.

Por lo tanto, existe durante los siglos de la existencia humana sobre la tierra un continuo esfuerzo y una lucha continua para ordenar con justicia la totalidad de la vida social en sus diversos aspectos. Es necesario contemplar con respeto los múltiples programas y la actividad, a veces reformadora, de los diversos sistemas y tendencias. Es necesario, al propio tiempo, ser conscientes de que no se trata aquí, sobre todo, de sistemas, sino de la justicia y del hombre.

No puede ser el hombre para el sistema, sino que el sistema debe ser para el hombre. Por ello es necesario defenderse del anquilosamiento del sistema. Pienso en los sistemas sociales, económicos, políticos, culturales que deben ser sensibles para el hombre, para su bien integral, deben ser capaces de reformarse a sí mismos, sus propias estructuras, de acuerdo con lo que exige la plena verdad sobre el hombre. Desde este punto de vista se impone valorar el gran esfuerzo de nuestros tiempos, que aspira a definir y a consolidar «los derechos del hombre» en la vida de la humanidad de hoy, de los pueblos y de los Estados.

La Iglesia de nuestro tiempo permanece en continuo diálogo en el inmenso frente del mundo contemporáneo, como lo evidencian numerosas encíclicas de los Papas y la doctrina del Concilio Vaticano II. El Papa actual, ciertamente, deberá volver muchas veces sobre estos temas. En la breve exposición de hoy es necesario limitarse a señalar solamente este amplio y diferenciado terreno.

4. Es necesario, pues, que cada uno de nosotros pueda vivir en un contexto de justicia y, más aún, que cada uno de nosotros sea justo y actúe justamente respecto a los seres próximos y lejanos, respecto a la comunidad, respecto a la sociedad de la que es miembro... y respecto a Dios.

La justicia tiene muchas referencias y formas. Existe también una forma de la justicia que se refiere a lo que el hombre «debe» a Dios. Este es un tema principal y amplio por sí solo. No lo voy a desarrollar ahora, aun cuando no puedo abstenerme de enunciarlo.

Detengémonos, entre tanto, sobre los hombres. Cristo nos ha dejado el mandamiento del amor del prójimo. En este mandamiento se encierra todo lo que concierne a la justicia. No puede haber amor sin justicia. El amor desborda la justicia, pero, al mismo tiempo, encuentra su verificación en la justicia. Hasta el padre y la madre, cuando aman al propio hijo, de-

ben ser justos con él. Si vacila la justicia, también el amor corre peligro.

Ser justo significa dar a cada uno lo que le es debido. Esto concierne a los bienes temporales, de naturaleza material. El mejor ejemplo puede ser aquí la retribución por el trabajo o el llamado así derecho a los frutos del propio trabajo y de la propia tierra. No obstante, al hombre se debe, además, el buen nombre, el respeto, la consideración, la fama que se ha merecido. Cuanto más conocemos al hombre, tanto más se nos revela su personalidad, su carácter, su inteligencia y su corazón. Y tanto más nos damos cuenta —y debemos darnos cuenta de ello— de con qué criterio «medirlo» y qué quiere decir ser justos con él.

Por ello es necesario profundizar continuamente el conocimiento de la justicia. No es ciencia teórica. Es virtud, es capacidad del espíritu humano, de la voluntad humana y también del corazón. Es necesario, además, orar para ser justos y saber ser justos.

No podemos olvidar las palabras del Señor: «Con la medida que midiereis, seréis medidos» (Mat. 7,2).

Hombre justo, hombre de «justa medida».

¡Que todos nosotros lo seamos! ¡Que todos nosotros aspiremos constantemente a serlo! A todos, mi bendición.

**Discurso de Juan Pablo II, de 25 de noviembre de 1978, a los participantes al XXIX Congreso Nacional de Estudio de la Unión de Juristas Católicos, sobre libertad para los servicios asistenciales en el Estado contemporáneo [«Ecclesia», del 9 de diciembre de 1978].**

Ilustres Señores e Hijos queridísimos:

Constituye para mí una profunda alegría el recibiros hoy a vosotros, juristas católicos italianos, llegados a Roma con motivo del XXIX Congreso Nacional, el cual, podemos decir, desde sus comienzos, se ha anticipado a las orientaciones del Concilio Euménico Vaticano II en virtud de la misión del laicado católico. Personalidades insignes por su fe ardiente, por su profundo pensamiento filosófi-

co y su indiscutible competencia técnico-jurídica, han querido comprometerse mediante vuestra benemérita Asociación a «contribuir a la actualización de los principios de la ética cristiana en la ciencia jurídica, en la actividad legislativa, judicial y administrativa, en toda la vida pública y profesional»; como indica vuestro estatuto en su artículo 2.

Es para mí un gran consuelo no solamente vuestra cualificada presencia en es-

ta audiencia, sino también saber que en estos treinta años la Unión se ha comprometido a dar una inspiración cristiana en múltiples campos de la vida social. Son señal y demostración de ello las actas de los congresos de estudio y las publicaciones a las que la Unión ha dado vida, todas caracterizadas por el espíritu de servicio, respecto a la persona humana, a los fines de la afirmación y promoción de sus derechos y de sus valores inalienables de libertad de inviolabilidad de desarrollo.

Pero me sirve principalmente de consuelo la constante fidelidad demostrada a la Iglesia, al Papa, a los Obispos, cuyas enseñanzas y orientaciones, vuestra Unión ha recibido siempre con respeto, amor y devoción, sin ceder a las lisonjas y a las tentaciones de malentendidas autonomías al proponer y defender los principios de la ética natural y cristiana, que rigen la institución matrimonial, y al firmar, además, la inviolabilidad y el carácter sagrado de la vida humana desde el momento de la concepción, en las costumbres y en la ley. Vuestra Unión ha considerado un honor, incluso antes que un deber, recibir y seguir la palabra del Vicario de Cristo. Y esta autorizada palabra no os ha faltado en el pasado: Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI, con motivo de los Congresos de la Unión, han pronunciado discursos de alto contenido doctrinal, ofreciendo principios e indicaciones de validez universal en torno a los grandes problemas que la vida de la sociedad plantea al jurista cristiano. Me es grato recordar el discurso —siempre tan actual— que os dirigió Pablo VI, de venerable memoria, el 9 de diciembre de 1972, con motivo de vuestro Congreso sobre la «Defensa del Derecho al Nacimiento».

Y la palabra del Papa no quiere faltar hoy, con motivo del Congreso que tiene como tema «La libertad de la asistencia».

Dicho argumento —tan delicado y vivo— se aborda sin más por el jurista en toda su compleja problemática jurídica (constitucionalista, técnico-legislativa, filosófico-jurídica), pero no puede estudiarse adecuadamente sin cuestionar el proyecto de sociedad que se quiere realizar y, más aún, la misión de la persona humana —de sus derechos fundamentales y de sus libertades— que cualifica el mismo proyecto de sociedad.

La sociedad se ha hecho para el hombre, «hominis causa omne jus constitutum

est». Al servicio del hombre se ha creado la sociedad con sus leyes; la Iglesia ha sido fundada por Cristo para la salvación del hombre (cfr. Cons. dogm. «Lumen gentium» n. 8; Const. past. «Gaudium et spes», 45). Por ello, también la Iglesia tiene una palabra propia que decir en relación con dicho tema.

Y debe, en primer lugar, decir que el problema de la «libertad de la asistencia» en un Estado moderno, que quiera ser democrático, se enmarca en el más amplio discurso de los derechos del hombre, de las libertades civiles y de la misma libertad religiosa.

El hombre es ser inteligente y libre, por destino natural ordenado a realizar las potencialidades de su persona en la sociedad. Expresiones de este su innato carácter social son la sociedad natural fundada sobre el matrimonio uno e indisoluble, como es la familia, las libres formaciones intermedias; la comunidad política, de la que el Estado, en sus varias articulaciones institucionales, es la forma jurídica. Esto debe garantizar a todos sus miembros la posibilidad de un pleno desarrollo de su persona. Esto exige que a quienes se encuentran en condiciones de necesidad por enfermedad, pobreza, minimizaciones de diverso orden se ofrezcan los servicios y ayudas que requiere su situación particular. Antes incluso que obligación de justicia por parte del Estado, esto constituye una obligación de solidaridad por parte de todo ciudadano.

Para el creyente, además, es una exigencia inevitable de su fe en Dios Padre, el cual llama a todos los hombres a constituir una comunión de hermanos en Cristo (cfr. Mat. 23, 8-9); es una gozosa obediencia al precepto bíblico: «Deus mandavit illis unicuique de proximo suo» (cfr. Sir. 17, 12); es la realización plena del deseo de descubrir, de encontrar a Cristo en el prójimo que sufre: «Siempre que habéis hecho estas cosas a uno de mis hermanos más pequeños, me las habéis hecho a Mí» (Cfr. Mat. 25, 34-40).

Sobre todo esto se funda el deber de la asistencia, pero también su inevitable libertad. El ciudadano, como individuo asociado, debe ser libre de ofrecer servicios de asistencia en conformidad a las propias capacidades y a la propia inspiración ideal.

Debe ser libre la Iglesia, la cual ya «desde sus primeros comienzos —uniendo el «ágape» con la Cena Eucarística— se

manifestaba toda unida en el vínculo de la caridad en torno a Cristo; así, también, en todo tiempo se reconoce por esta contrasena de la caridad, y, mientras goza de las iniciativas ajenas, reivindica las obras de caridad como su deber y derecho inalienable». (Decr. «Apostolicam Actuositatem», n. 8).

Estas libertades no serían respetadas, ni en la letra ni en el espíritu, si prevalece la tendencia de atribuir al Estado y a las demás expresiones territoriales del poder público una función concentradora y exclusiva de organización y de gestión directa de los servicios o de rígidos controles que terminarían con desnaturalizar su propia función legítima de promoción, de impulso, de integración y también —si fuera necesario— de sustitución de la iniciativa de libres formaciones sociales de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

El episcopado italiano —como se sabe— ha manifestado también recientemente sus preocupaciones por el peligro real de que queden restringidos los espacios efectivos de libertad, de que sea reducida y cada vez más limitada la libre acción de las personas, de las familias, de los cuerpos intermedios, de las mismas asociaciones civiles y religiosas, en favor del poder público con el resultado de «irresponsabilizar y crear presupuestos peligrosos de una colectividad, que pierde al hombre, suprimiendo sus derechos fundamentales y sus libres capacidades de expresión» (comunicado de la CEI, de enero de 1978).

De igual forma, el mismo episcopado italiano ha expresado la preocupación de que obras beneméritas, que durante si-

glos, bajo el impulso de la caridad cristiana se han preocupado de los huérfanos, de los ciegos, de los sordomudos, de los ancianos, de toda clase de necesitados, gracias a la generosidad de los donantes y al sacrificio personal, a veces heroico, de religiosas y de religiosos, y que por razón de disposiciones legislativas tenían que haber asumido, contrariando su voluntad, la figura única de instituciones públicas de asistencia y beneficencia —con una cierta garantía, por otra parte, respecto a sus fines institucionales—, sean suprimidas o en cualquier caso no suficiente y eficazmente garantizadas.

El Papa no puede permanecer ajeno a estas preocupaciones, que afectan a la posibilidad misma para la Iglesia de desarrollar su misión de caridad y que afectan también a la libertad de los católicos y de todos los ciudadanos, aisladamente o asociados, de dar vida a obras conforme a sus ideales, dentro del respeto de las leyes justas y en servicio del prójimo necesitado.

Auguro, por tanto, que vuestro congreso tenga un éxito feliz en el estudio de un tema que afecta a la naturaleza misma de la Iglesia en su original compromiso de entrega a los demás; que vuestra benemérita Unión continúe prestando a la sociedad italiana una fecunda contribución de ideas, de propuestas; pero, sobre todo, un testimonio de inspiración y de vida cristiana, especialmente en el campo profesional.

Con tales deseos, muy gustosamente y de todo corazón, os imparto la bendición apostólica, que pretendo ampliar a todos los juristas católicos y a las personas que os son queridas.

**Discurso de Juan Pablo II, del 29 de diciembre de 1978, a la Asociación de Médicos Italianos, sobre la libertad de conciencia y defensa de la vida [«Ecclesia», del 13 de enero de 1979].**

[...] Esto vale sobre todo hoy, cuando poderosas corrientes de opinión apoyadas eficazmente por los grandes medios de comunicación de masas tratan de influir

tanto en la conciencia de los médicos, para inducirlos a prestar su labor en prácticas contrarias a la ética, no solamente cristiana, sino también sencillamente na-

tural, en abierta contradicción con la deontología, expresada en el celeberrimo juramento del antiguo médico pagano.

En el mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz del primero de enero pasado, mi gran predecesor Pablo VI, de venerable memoria, dirigiéndose con una palabra especial a los médicos, señalados como «Sabios y generosos defensores de la vida humana», expresó la confianza de que el «ministerio religioso» pudiese encontrarse unido al «ministerio terapéutico» de los médicos, en la afirmación y en la defensa de la vida humana en todas «aquellas singulares contingencias en las cuales la vida misma puede verse comprometida por positivo e inícuo propósito de humana voluntad». Estoy seguro de que este llamamiento angustioso y profético ha encontrado y encuentra amplísimo eco de aprobación no sólo entre los médicos católicos italianos, sino también entre los que, a pesar de no estar animados por la fe, se encuentran sin embargo profundamente dominados por las exigencias superiores de su profesión.

Como ministro de aquel Dios, que la Escritura presenta como «amante de la vida» (Sab. 11, 26), deseo expresar también yo mi sincera admiración por todos los sanitarios que, siguiendo el dictado de la recta conciencia, saben resistir diariamente a lisonjas, presiones, amenazas y, a veces, incluso a violencias físicas, para no mancharse con comportamientos de cualquier forma lesivos del bien sagrado que es la vida humana: Su testimonio valeroso y coherente constituye una importantísima contribución a la construcción de una sociedad que, para ser a medida del hombre, no puede sino poner en su fundamento el respeto y la defensa del presupuesto primordial sobre cualquier otro derecho humano, es decir, el derecho a vivir.

El Papa une gustoso su voz a la voz de todos los médicos de recta conciencia y hace suyos los deseos fundamentales de ellos: El deseo, en primer lugar, de ver reconocida la naturaleza más íntima de su noble profesión, que los quiere ministros de la vida y jamás instrumentos de muerte; el deseo, además, de un respeto pleno y total, en la legislación y en los hechos, de la libertad de conciencia, entendida como derecho fundamental de

la persona a no ser forzada a actuar contra la propia conciencia ni impedida de comportarse de conformidad con ella; por último, además del deseo de una indispensable y firme defensa jurídica de la vida humana en todas sus etapas, también aquel otro de estructuras operativas adecuadas que favorezcan la recepción jubilosa de la vida que nace, su promoción eficaz durante el desarrollo y la madurez, su defensa solícita y delicada cuando comienza su decadencia e incluso hasta su natural extinción.

El servicio a la vida debe ver comprometidos, con generoso entusiasmo, sobre todo a los médicos católicos, los cuales en su fe en Dios creador, del que el hombre es imagen, y en el misterio del Verbo eterno descendido del cielo en la carne frágil de un niño indefenso, encuentran una nueva y más sublime razón de entrega alegre al cuidado amoroso y a la defensa desinteresada de todo hermano, especialmente si es pequeño, pobre, inerme, amenazado. Me sirve de consuelo saber que estas convicciones están profundamente enraizadas en vuestro espíritu: Ellas inspiran y orientan vuestra cotidiana actividad profesional y saben sugeriros, cuando es necesario, tomas de postura, incluso públicas, claras e inequívocas.

¿Cómo no mencionar, a este propósito, el ejemplar testimonio dado por vosotros, con adhesión oportuna y compacta a las orientaciones del Episcopado, en el reciente y doloroso suceso de la legislación abortista? Ha sido un testimonio en el cual —lo subrayo con orgullo en mi calidad de obispo de Roma— esta ciudad se ha distinguido particularmente, ofreciendo también a los médicos no católicos una invitación y un estímulo de providencial eficacia.

Este gesto responsable conseguirá más eficazmente sus fines de afirmación del derecho de libertad de conciencia del personal médico y similar, sancionado con la correspondiente cláusula en la ley de defensa del derecho a la vida y de denuncia social de una situación legal lesiva de la justicia, adoptado con autenticidad de motivación y confirmado por una generosidad desinteresada abierta a todos los compromisos e iniciativas al servicio de la persona humana [...].



**Homilía de Juan Pablo II el día 31 de diciembre de 1978, fiesta de la Sagrada Familia [«L'Osservatore Romano» de 2-3 de enero de 1979].**

[...] Los problemas humanos más profundos están ligados a la familia. Ella constituye para el hombre la comunidad primera, fundamental e irremplazable. «La familia ha recibido de Dios esta misión de ser la célula primaria y vital de la sociedad», dice el II Concilio Vaticano (Decr. *Apostolicam actuositatem*, 11). De esto también quiere la Iglesia dar un testimonio particular durante la octava de Navidad con la fiesta de la Sagrada Familia. Ella quiere reafirmar que a la familia le están unidos valores fundamentales que no se pueden violar sin daños incalculables de naturaleza moral.

[...] ¿De qué valores se trata? Para dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta, haría falta señalar la jerarquía y todo un conjunto de valores que se definen y se condicionan recíprocamente. Pero, queriendo expresarnos de un modo conciso, diremos que se trata aquí de dos valores fundamentales que entran rigurosamente en el contexto de lo que llamamos «amor conyugal». El primero es el valor de la persona, que se expresa en la

fidelidad recíproca absoluta, hasta la muerte: fidelidad del marido a su mujer y fidelidad de la mujer a su marido. La consecuencia de esta afirmación del valor de la persona, que se expresa en la relación recíproca entre marido y mujer, debe ser también el respeto al valor personal de la nueva vida, es decir, del niño, desde el primer instante de su concepción.

[...] Aún respetando a los que piensan de otra manera, es difícil reconocer, desde un punto de vista objetivo e imparcial, que corresponda a la verdadera dignidad humana el comportamiento de quien traiciona la fidelidad conyugal o permite que sea aniquilada, destruida, la vida concebida en el seno materno. En consecuencia, no es posible pensar que los programas que sugieren, facilitan, admiten tales comportamientos, sirvan al bien objetivo del hombre, el bien moral, que contribuyan a hacer la vida humana verdaderamente más humana, verdaderamente más digna del hombre, que sirvan para construir una sociedad mejor [...].

